LEY DE JUSTICIA Y PAZ 975 DE 2005
(ANÁLISIS JURÍDICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY)

EDILBERTO CARRERO LÓPEZ

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESPAÑA
FACULTAD DE DERECHO

BOGOTÁ 2012

**LEY DE JUSTICIA Y PAZ 975 DE 2005
(ANÁLISIS JURÍDICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY)**

MONOGRAFIA

EDILBERTO CARRERO LÓPEZ

DIRECTOR

DR. JORGE RESTREPO FONTALVO

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESPAÑA

FACULTAD DE DERECHO

BOGOTÁ 2012

Nota de Aceptación:

Firma del Presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del jurado

Bogotá, Diciembre de 2012

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

Doy las gracias a Dios, a mi familia, a mis docentes y a mi adorada Universidad, ya que han sido los seres más especiales que la vida me ha brindado señalándome cuál camino es el que se debe seguir, en donde brille la honestidad, compromiso y profesionalismo.

Deseo demostrar mi leal agradecimiento al doctor Jorge Restrepo Fontalvo, Director de la monografía por su aliento en los momentos de duda y su apoyo decidido durante el desarrollo de este trabajo.

Finalmente extender mis agradecimientos a la Universidad de Salamanca de España y la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomas, quienes facilitaron la realizaron de este estudio de profundización, permitiendo así mi crecimiento profesional y personal.

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN.....	9
INTRODUCCIÓN.....	10
CAPITULO I	
EL PARAMILITARISMO Y EL CONFLICTO HISTÓRICO EN COLOMBIA	
1.1. Concepto y significado del término “paramilitar”.....	17
1.2. Marco histórico del conflicto colombiano.....	18
1.2.1. Las Guerras Civiles del siglo XIX	
1.2.2. La primeras décadas del siglo XX	
1.2.3. El crimen de Jorge Eliecer Gaitán y el período de la resistencia liberal	
1.2.4. El periodo del Golpe Militar del General Gustavo Rojas Pinilla	
1.2.5. El periodo del Frente Nacional	
1.2.6. El auge de las guerrillas contemporáneas a partir de 1960	
1.2.7. El auge de los grupos paramilitares contemporáneas a partir de 1985	
1.3. El conflicto armado contemporáneo en Colombia.....	23
1.4. La génesis histórica del paramilitarismo en Colombia.....	24
1.5. La versión del paramilitarismo como respuesta a la violencia de la guerrilla.....	25

CAPÍTULO II

LAS POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS ENTRE 1990 Y 2010 PARA LOS ACUERDOS DE PAZ CON LOS GRUPOS GUERRILLEROS Y PARA TRATAR EL FENÓMENO PARAMILITAR

2.1. POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS PARA LOS ACUERDOS DE PAZ CON LOS GRUPOS GUERRILLEROS.....27

- 2.1.1. Los acuerdos de paz en el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla
- 2.1.2. La perspectiva de paz de los Gobiernos de Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia y Julio César Turbay Ayala
- 2.1.3. El Gobierno de Belisario Betancourt (1982 - 1986)
- 2.1.4. El Gobierno de Virgilio Barco (1986 - 1990)
- 2.1.5. El Gobierno de Cesar Gaviria Trujillo (1990 - 1994)
- 2.1.6. Gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994 -1998)
- 2.1.7. Guillermo León Valencia y Julio César Turbay Ayala El Gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998 - 2002)

2.2. POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS ENTRE 1990 Y 2010 PARA TRATAR EL FENÓMENO PARAMILITAR..... 34

- 2.2.1. El Gobierno de César Gaviria (1990-1994)
- 2.2.2. El Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998)
- 2.2.3. El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002)
- 2.2.4. El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2010)

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ 975 DE 2005

- 3.1. Antecedentes legislativos de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz y las adecuaciones legales de favorabilidad para los grupos paramilitares.....53
- 3.2. Sobre la Justicia Transicional y Restaurativa.....54
- 3.3. El real alcance de la Verdad, Justicia y Reparación.....57

3.4. La Verdad, Justicia y Reparación en los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	66
3.5. Procedimiento establecido en la Ley 975 de 2005.....	68
3.6. Etapas del juzgamiento.....	69
3.7. Organismos creados para implementar la Ley 975 de 2005.....	84

CAPÍTULO IV

LAS DEFINICIONES DE LA ONU SOBRE DERECHOS HUMANOS Y LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

4.1. El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. ONU/1998.....	85
4.2. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22 de noviembre de 2000 (Reparaciones).....	86
4.3. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2004.....	88
4.4. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de septiembre de 2005.....	90

CAPÍTULO V

SÍNTESIS VALORATIVA DE LA SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL C-319 Y C-370 DE 2006 SOBRE LA LEY 975 DE 2005

5.1. Síntesis valorativa de las sentencias de la Corte Constitucional sobre la Ley 975 de 2005.....	91
5.2. Síntesis valorativa de la Parte Resolutiva de la Sentencia C-370 de 2006.....	92

5.3. Examen de los cargos de constitucionalidad formulados contra las normas demandadas.....	95
5.4. Consideraciones sobre los cargos de fondo propuestos.....	103

CAPÍTULO VI

EFFECTOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ 975 DE 2005

6.1. Las estadísticas.....	106
6.2. El balance de la implementación de la ley de Justicia y Paz.....	107
6.3. Los interrogantes más protuberantes y las perspectivas más evidentes.....	108

CONCLUSIONES.....110

1. Primera conclusión: La ley de Justicia y Paz 975 de 2005, siendo inconstitucional, fue avalada por las Sentencias de la Corte Constitucional
2. Segunda Conclusión: La Ley 975 de 2005 redefinió el delito de sedición confiriendo estatus político a los grupos paramilitares
3. Tercera conclusión: El derecho a la verdad que tienen las víctimas no es verdad en la aplicación de la ley de Justicia y Paz
4. Cuarta conclusión: El derecho a la Justicia a que tienen derecho las víctimas es de injusticia plena para éstas en la aplicación de la ley 975 de 2005
5. Quinta conclusión: El derecho a la reparación integral y multidimensional a que tienen derecho las víctimas es una burla
6. Sexta conclusión: Graves inconsistencias de coherencia jurídica en la Ley 975 de 2005, la hacen inaplicable e inviable.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....123

ANEXOS

RESUMEN

La Ley de Justicia y Paz 975 de 2005 se proyectó y aprobó, buscando atender el fenómeno del paramilitarismo en Colombia, como una de las expresiones del conflicto interno que existe en Colombia. El enfoque de la monografía busca desarrollar el análisis jurídico de la implementación de la ley de Justicia y Paz, buscando interrelacionar las implicaciones histórica y social. Se desarrolla el análisis jurídico sobre los diversos tópicos y contenidos de la ley, que fueron objeto de demanda y de dos (2) Sentencias de la Corte Constitucional, a través de las cuales la ley fue convalidada. Simultáneamente se avanza en el análisis de la ley y su implementación, desde el enfoque de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual lleva a la caracterización de su contrariedad jurídica con los compromisos del ordenamiento internacional adherido por Colombia a su bloque de constitucionalidad. Se hilvanan los efectos correspondientes de la implementación de la ley, desde un balance cualitativo y cuantitativo, el cual arroja las conclusiones de inconstitucionalidad, de incumplimiento con las víctimas a sus derechos fundamentales de la verdad, la justicia y la reparación integral y multidimensional. Se concluye que la Ley 975 de 2005, como expresión de la justicia transicional, se erige como blindaje a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. A siete (7) años de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, se desmovilizaron aproximadamente 35.353 personas de grupos armados, de los cuales fueron exonerados 31.281 y postulados únicamente 4.511 (4.072 paramilitares y 439 guerrilleros). De éstos a sólo cuatro (4) postulados se les ha proferido condena, de los cuales dos (2) con sentencia parcial debidamente ejecutoriada.

INTRODUCCIÓN

Mi interés por el tema se debe a la vigencia y profundización del paramilitarismo como expresión del conflicto interno que existe en Colombia, así como a la reiterada condena de la comunidad internacional y la exigencia de solución por parte de los organismos internacionales de derechos humanos.

Así mismo, mi inclinación por el tema se da por el conocimiento directo de las dolorosas consecuencias del accionar paramilitar, al cual he tenido acceso directo como miembro adscrito a la Defensoría Pública, Regional Bogotá Unidad 13, encargada de la representación de las víctimas dentro del proceso de Justicia y Paz.

Los interrogantes de mayor significación los cuales son la base del análisis de la realidad fáctica, tienen que ver con los siguientes aspectos:

¿Puede una ley lograr la paz en Colombia?

¿Es suficiente saber quiénes realizaron, apoyaron, patrocinaron y determinaron las masacres para aceptar lograda la verdad?

¿Será que se aplica justicia, con ocho años de prisión para criminales de lesa humanidad, con unas cárceles cómodas de beneficios y privilegios?

¿Cuál reparación, sin verdad y sin justicia?

¿Será que los pocos paramilitares que decidan pagar algunos cientos de millones de pesos a las viudas y a los huérfanos de los muertos, todo quedará reparado, perdonado y olvidado?

¿Será que nuestro país está preparado para aceptar una verdad a medias, una justicia parcializada y una reparación incierta?

El enfoque de la monografía busca desarrollar el análisis jurídico de la implementación de la ley de Justicia y Paz, buscando interrelacionar las implicaciones histórica y social, en el marco del conflicto interno colombiano.

El problema jurídico central de la ley de Justicia y Paz es la incompatibilidad existente con la naturaleza y los alcances de los desarrollos normativos nacionales, respecto al reconocimiento tácito y explícito que se le otorgó a los grupos paramilitares como actores políticos, despojándolos de su condición real como bandas delincuenciales perpetradores de crímenes de lesa humanidad, contra muchas comunidades inermes de la población civil.

La condición autoproclamada de los paramilitares de constituirse en apoyadores de las políticas del Estado colombiano contra la violencia guerrillera, los inhabilitaba para ser portadores de delitos políticos y conexos, instituidos en los preceptos constitucionales y legales de la nación colombiana, como la rebelión y la sedición (artículos 467 y 468 del Código Penal).

La caracterización elaborada por la ley 975 de 2005 de conferir status político a los grupos paramilitares, sirvió de base y argumento jurídico para hilvanar la aplicación y los alcances a favor de estos grupos de la denominada Justicia Transicional y Restaurativa. Por ello, todo su diseño está claramente definido para amparar a los victimarios, como realmente ha venido ocurriendo en los procesos que han logrado algún grado de implementación. En este sentido, se anuló la posibilidad que la ley pudiera cumplir los objetivos de alcanzar la verdad, la justicia y la reparación a favor de las víctimas.

La hipótesis de solución a esta grave falencia jurídica de concederle el status político a los paramilitares ha debido ser la reestructuración legislativa que posibilitara la atención adecuada del fenómeno y la posible solución de fondo por parte del Estado colombiano. Esta solución no se dio al ser convalidada la ley 975 de 2005 a través de dos (2) sentencias por parte de la Corte Constitucional.

La monografía busca demostrar con argumentos jurídicos y ejemplos fácticos de la aplicación de la ley de Justicia y Paz, como no ha sido posible que en los procesos haya sido posible alcanzar el objetivo de la verdad para las víctimas, en razón a que todo el tramado procedimental fue diseñado para amparar a los victimarios.

La Corte Constitucional al respecto ha dicho: *“El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la*

impunidad (principios 1° a 4) incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber”.

En este punto es preciso señalar que los grupos al margen de la ley, están en la obligación social, moral y legal de revelar la verdad histórica de cuáles conductas punibles realizaron y de indicar cuál fue la suerte que tuvieron las personas retenidas por el grupo, circunstancia necesaria para poder acceder a los beneficios contemplados en esta ley.

El principio de la verdad es el más importante dentro de este proceso de Justicia y Paz porque se refiere al hecho de que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.

Se establece que tanto las víctimas como la sociedad entera tienen derecho real y efectivo de saber cuál fue la suerte que tuvieron sus familiares, amigos o ciudadanos colombianos que se han visto afectados por la violencia, exigiendo en términos reales la publicidad del mismo.

Desde mi ejercicio como defensor público he corroborado que esto no se ha venido cumpliendo ya que la Fiscalía delegada para estos asuntos considera todo lo

contrario, no permitiendo que la versión de los procesados sea transmitida en vivo y directo por los diversos medios masivos de comunicación.

La presente monografía está argumentada en la siguiente estructura de presentación:

En primera instancia, planteó un esbozo de las causas de la violencia política guerrillera y del paramilitarismo en el marco del conflicto histórico en Colombia, en donde el aumento de la concentración de la riqueza y sobre la propiedad de la tierra han sido las constantes, dando como resultado la permanente injusticia y desigualdad social.

Así mismo, recopiló elementos históricos que demuestran que el fenómeno paramilitar no sólo es contemporáneo para las dos últimas décadas del siglo XX, sino que tuvo sus orígenes en el contexto de la denominada violencia liberal-conservadora de los años cincuenta del siglo pasado. Se plantean algunos elementos sobre el conflicto armado contemporáneo en Colombia, la génesis histórica del paramilitarismo en Colombia y la versión del paramilitarismo como respuesta a la violencia de la guerrilla.

En segunda instancia, sintetizó un recorrido de las políticas de los Gobiernos entre 1990 y 2010, en cuanto a los procesos de paz con los grupos guerrilleros y el tratamiento al fenómeno paramilitar.

En tercera instancia, se realiza una síntesis de los principales aspectos de la ley 975 de 2005, la cual convalidó el proceso de paz del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares en Santafé de Ralito, cuyos compromisos básicos giraron en torno a la desmovilización, desarme y reinserción de todos sus miembros.

Se advierte que ha sido un proceso exclusivamente diseñado para los desmovilizados, con unos privilegios especiales en donde éstos debieron comprometerse directamente al cumplimiento de los principios de la VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y DE NO REPETICIÓN. La aplicación de esta ley no se traduce como un proceso ni de indulto, ni de amnistía, siendo su principal definición jurídica especial, la aplicación sancionatoria penal de privación de la libertad tan sólo por un periodo entre cinco (5) y ocho (8) años.

En cuarta instancia, se hace referencia a las definiciones de la ONU sobre derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En quinta instancia, elaboro la síntesis valorativa de las Sentencias de la Corte Constitucional y la síntesis valorativa de la Parte Resolutiva de la Sentencia C-370 de 2006.

En sexta instancia, expreso los efectos de la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005.

En séptima instancia, defino seis (6) conclusiones, las cuales resumen las consideraciones principales del problema jurídico central que se plantea en esta monografía.

CAPITULO I

EL PARAMILITARISMO Y EL CONFLICTO HISTÓRICO EN COLOMBIA

1.1. Concepto y significado del término “paramilitar”

El término paramilitar “se refiere a una organización civil con estructura o disciplina de tipo militar” (Diccionario de la lengua española, 2004, p. 255).

Así mismo, “Los paramilitares son grupos armados que están directa o indirectamente con el Estado y sus agentes locales, conformados por el Estado o tolerados por éste, pero que se encuentran por fuera de su estructura formal” (Stathis & Arjona, como se citó en Rangel, 2006, p.29).

Es preciso tener claro que el término paramilitarismo como tal, no puede ser el mismo entendido en nuestro medio ya que se observa que son grandes ejércitos de vulneradores de derechos humanos y narcotraficantes; es por ello que a la comunidad internacional y obviamente a mí me perturba el hecho de saber que esta clase de delincuentes se vean favorecidos por leyes suaves que los terminarán premiando; pero en fin, esto es producto de la carencia de una política clara de paz del Gobierno Nacional.

Es por ello que calificar como paramilitares a unos hombres que se agruparon para continuar desangrando al país, sin ningún tipo de ideología, que lo único que reclutaron dentro de sus filas fueron personas sin moral ni principios, para que por la suma de \$800.000.00 mensuales aproximadamente, quitaran la vida a sus propios vecinos y familiares, en errónea conducta justificada por ellos mismos aduciendo que les tocaba cumplir las órdenes de sus superiores, no encaja en dicha terminología semántica.

Al respecto considero que los mal llamados paramilitares, son un grupo armado al margen de la ley, que como se verá en el desarrollo de esta monografía, se han dedicado a acabar a la guerrilla y sus auxiliares, a realizar limpieza social con pautas que ellos arbitrariamente determinan, como lo es exterminar por medio del genocidio a indigentes, drogadictos, prostitutas, alcohólicos, ladrones, población LGTB, etc., razón por la que es claro que no son más que un grupo armado de delincuentes, que han sembrado el terror y zozobra en el territorio nacional.

1.2. Marco histórico del conflicto colombiano

¿Por qué se promulga la ley de justicia y paz en Colombia en el año 2005?

Sencillamente porque subsiste el histórico conflicto armado.

El marco histórico de la situación actual y de la aparición del paramilitarismo contemporáneo, es el acontecer nacional desde la creación de la República, la cual ha tenido la siguiente secuencia y características:

1.2.1. Las Guerras Civiles del siglo XIX cuyas causas fueron el regionalismo y el caudillismo, en las cuales el pueblo fue obligado a enfrentarse contra sí mismo, desde supuestos planteamientos políticos, detrás de los cuales sólo se dirimía el control político y la concentración de la tierra y la riqueza por parte de las clases herederas del colonialismo español.

La perspectiva y recorrido de este fenómeno fratricida (Ocampo, 1998) es relatado de la siguiente manera:

La Guerra Civil de 1812, originada por las divergencias entre los centralistas y los federalistas.

La Guerra Civil de 1840, llamada de “Los Supremos”, que se desarrolló durante la administración del presidente José Ignacio de Márquez. Tuvo repercusiones en el espíritu de la Constitución del año 1843.

La Guerra civil de 1851, entre los enemigos de la revolución socio-económica del medio siglo y los partidarios de las reformas liberales del presidente José Hilario López.

La Guerra civil de 1854, contra la dictadura del general José María Melo y la búsqueda de la normalidad democrática.

La Guerra civil de 1860, acaudillada por el general Tomás Cipriano de Mosquera. Influyó en la Constitución de 1863.

La Guerra civil de 1876, de origen político-religioso, la cual enfrentó a conservadores y radicales.

La Guerra Civil de 1885, de la regeneración y los radicales, la cual culminó en la Constitución de 1886.

La Guerra Civil de 1895, que obedeció a causas de inconformidad con el gobierno de Miguel Antonio Caro.

La Guerra Civil de los Mil Días, 1899-1902, entre liberales y conservadores, la más sangrienta de la historia nacional. Esta guerra culminó con el gobierno dictatorial del general Rafael Reyes. (Ocampo, 1998).

Característica fundamental de estas nueve guerras civiles del siglo XIX es que todas quedaron inconclusas política y económicamente, dejando pendientes sus disputas y problemáticas, en el marco de una situación real en el que las clases dominantes se beneficiaban de los enfrentamientos entre el mismo pueblo liberal y conservador, donde los ricos se enriquecían más y los pobres ponían los muertos y la miseria. Estas guerras civiles fueron el surco de sembrado para la violencia del siglo XX.

1.2.2. Las primeras décadas del siglo XX. Esas contiendas pendientes, no resueltas, hacen que venga el periodo de represión oficial y luchas populares correspondiente a las primeras décadas del siglo XX, caracterizado entre otras, por la masacre de las Bananeras, (noviembre de 1928); una “revolución en marcha” que culmina en “la gran pausa”, la división del liberalismo y la unión nacional conservadora; las masacres estudiantiles del 7 y 8 de junio de 1929 y del 8 y 9 de junio de 1954; la muerte de sindicalistas y líderes campesinos, factores de violencia partidista y que continuaron alimentando el surco del odio en el seno del mismo pueblo.

Situación de violencia oficial que se expresó (Gaitán, 1948) en la proclama de la “Oración por la Paz”, así:

Señor Presidente Mariano Ospina Pérez: Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia (Gaitán, 1948).

1.2.3. El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y el período de la resistencia clasificado histórica y tradicionalmente como “de la violencia liberal-conservadora en Colombia” correspondiente a los años 1949 hasta 1960, el cual se desató por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 en el famoso “Bogotazo”. Surge la resistencia campesina contra la ola de violencia partidista contra los campesinos, el cual se inicia con las Guerrillas del Llano, lideradas por Guadalupe Salcedo, Eduardo Franco Isaza y Dumar Aljure y va a desembocar en la resistencia de Marquetalia, Río Chiquito y Guayabero, en un enfrentamiento entre el Estado y los grandes terratenientes contra el campesinado.

Este período se caracterizó por el auge de grupos armados irregulares (pájaros, chulavitas), los cuales desarrollaron toda clase de atrocidades contra la población civil.

1.2.4. El periodo del Golpe Militar del General Gustavo Rojas Pinilla se dio como salida de la oligarquía, en razón a que la violencia partidista se le escapó del control,

especialmente por la guerrilla del llano. La dictadura militar desembocó en la entrega de las guerrillas del llano y de otros grupos de resistencia liberal que creyeron en la amnistía del momento. El régimen militar sin embargo no consiguió la paz y lejos de ello emprendió su propia forma de violencia dictatorial que se manifestó abiertamente en las masacres de los estudiantes del 8 y 9 de junio de 1954 y en la matanza de la Plaza de Toros de Bogotá.

1.2.5. El periodo del Frente Nacional entre 1958 y 1974, fue la maniobra de la habilidosa clase dirigente liberal-conservadora para recobrar el poder político, constituyéndose en otro plan estratégico para engañar y derrotar la resistencia popular. El Frente Nacional propuso una amnistía y una reforma agraria como ejes definitivos para alcanzar la paz. La espera reforma agraria no se ha dado hasta la actualidad.

Los presidentes del Frente Nacional fueron: Alberto Lleras Camargo del partido Liberal de 1958 – 1962, Guillermo León Valencia del partido Conservador de 1962 – 1966, Carlos Lleras Restrepo del partido Liberal de 1966 – 1970 y Misael Pastrana Borrero del partido Conservador de 1970 – 1974.

1.2.6. A partir de 1960 se establece el periodo del auge de las guerrillas contemporáneas con la formación del Bloque Sur en 1964, grupo de resistencia campesina, del cual más tarde saldrían las FARC en 1966; la fundación del ELN, en 1963; la fundación del EPL en 1967, de orientación Maoísta; la fundación del M-19 en

1970, cuya inspiración fueron las ideas del General Gustavo Rojas Pinilla; y la aparición del ERP en 1976.

1.2.7. A partir de 1985 se establece el periodo del auge de los grupos aislados de Autodefensa en algunas regiones del país, de las cuales se fundarían las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- o fuerzas paramilitares, inicialmente bajo el mando de los hermanos Castaño Gil.

Por eso sostengo que la violencia en Colombia no es a partir de 1948 sino que ésta se inició en 1812, con lo cual llevamos 199 años de conflicto armado.

1.3. El conflicto armado contemporáneo en Colombia

Para comprender el origen del paramilitarismo en Colombia, es indispensable hacer alusión a las causas que dieron origen y continúan alimentando el citado conflicto y hacerlo desde una reflexión histórica y sociológica.

Las causas de la violencia en Colombia son tres, bien conocidas:
La concentración de la riqueza y el poder político; La injusticia social; y la idiosincrasia del pueblo.

1.4. La génesis histórica del paramilitarismo en Colombia

Se puede recordar como inicio de los grupos paramilitares, varios eventos históricos que podrían señalar su aparición así:

Durante las guerras del siglo XIX los grandes latifundistas financiaron estos ejércitos para que protegieran sus tierras y sus privilegios. A partir de los años 40, mientras que la policía armaba los campesinos llamados **chulavitas** para atacar a las poblaciones liberales y asegurar el triunfo del partido conservador, los terratenientes utilizaron a los llamados **pajaros o guerrillas de paz** con el fin de salvaguardar sus propiedades y extenderse territorialmente” (Restrepo, 2006, p. 46). “Estas bandas armadas al servicio del partido conservador, llevaron a cabo una persecución contra los miembros del partido liberal, con complacencia y respaldo del establecimiento. (Sánchez & Meerten, 1983, p.57).

Las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, “han venido presentando en su génesis y evolución, diferentes etapas que parten de la década de los 50 con la conformación de las denominadas autodefensas liberales, como primera expresión de este concepto en Colombia en el marco de la lucha por la tenencia de las tierras y el marco de la violencia política que caracterizaba la época” (Díaz, 2006, recuperado de <http://www.voy.com>).

1.5. La versión del paramilitarismo como respuesta a la violencia de la guerrilla

Una de las versiones que copa un gran sector, determina que el fenómeno paramilitar en Colombia se debe a que las clases adineradas de nuestra sociedad al verse perseguidas en su integridad personal y económica por la insurgencia armada, decidieron unirse para tener un ejército civil que les generara una protección real y no ficticia como la que recibían por parte del Gobierno.

Respecto a las disímiles percepciones que han tenido diversos gobiernos sobre el alcance y las repercusiones de la presencia de la guerrilla en varias regiones del país (Rangel. 2001. P. 353) expresa lo siguiente:

El Estado colombiano ha tenido, frente al fenómeno de la insurgencia, las posturas más disímiles, que se corresponden casi totalmente con los cambios de gobierno que se realizan cada cuatro años, sin que se advierta un hilo conductor, ni claridad de propósitos a largo plazo. En términos generales, el Estado no ha concitado el apoyo nacional hacia la lucha contrainsurgente, que durante mucho tiempo ha sido subestimada o cuya naturaleza no se ha comprendido a cabalidad. El resultado es que no se han logrado unificar los esfuerzos de manera permanente, ni siquiera dentro del mismo Estado, para no hablar ya de la nación entera. Esta situación ha propiciado el mantenimiento de unas fuerzas militares muy poco adecuadas para contener y controlar una insurgencia que se ha desbordado sin freno a lo largo de todo el territorio nacional. (Rangel. 2001. P. 353).

Carlos Castaño narra en la entrevista realizada por el periodista Mauricio Aranguren Molina que:

A finales de 1982, se dio la primera reunión de ganaderos, agricultores y comerciantes de la región. Cerca de doscientos cincuenta empresarios se organizaron para defenderse de los atropellos de la guerrilla. Con base en las disposiciones legales de 1965 y 1968, que permitía a los ciudadanos portar armas con salvoconductos. El espíritu de la ley pretendía que los ciudadanos se organizaran y cuidaran sus predios, con colaboración de las fuerzas armadas. Como era algo legal, surgió la primera asociación de autodefensas colectivas, ACDEGAM, Asociación Campesina de Ganaderos y agricultores del Magdalena Medio. La reunión se efectuó en Medellín, porque el setenta por ciento de ellos no podían regresar a las fincas". (Aranguren, 2001, p. 96).

CAPÍTULO II

LAS POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS ENTRE 1990 Y 2010 PARA LOS ACUERDOS DE PAZ CON LOS GRUPOS GUERRILLEROS Y PARA TRATAR EL FENÓMENO PARAMILITAR

2.1. POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS PARA LOS ACUERDOS DE PAZ CON LOS GRUPOS GUERRILLEROS

2.1.1. Los acuerdos de paz en el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla

Los acuerdos de paz que se reseñan en Colombia en el siglo XX comenzaron con el tratado de Neerlandia del 30 de mayo de 1902, firmado por Rafael Uribe Uribe y el celebrado a bordo del buque Winsconsin, el 12 de noviembre de 1902, firmado por Benjamín Herrera y el presidente Marroquín, que puso fin a la llamada “guerra de los mil días” entre liberales y conservadores.

La guerra de los mil días y el acuerdo de paz de 1902, no solucionaron la disputa por el poder entre los dirigentes de los partidos liberal y conservador, el cual fue alternándose, teniendo éste último la hegemonía hasta bien entrada la década de los años cuarenta. El punto más álgido de la disputa política se dio con la preeminencia que fue tomando el caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, quien logró ponerse por encima de las dirigencias de los partidos tradicionales con una propuesta que fue acogida entre el pueblo liberal y conservador.

Gaitán sería asesinado el 9 de abril de 1948, lo cual desbordó a la dirigencia del partido liberal, quedando la guerrilla liberal fuera de su control político. Las dirigencias de los partidos encontraron la salida a la guerra civil desbordada e incontrolada, a través del golpe militar propiciado por el General Gustavo Rojas Pinilla.

La propuesta de amnistía propuesta por Rojas fue acogida por los guerrilleros liberales del llano los cuales depusieron las armas el 8 de septiembre de 1953 en Monterrey, creyendo en las promesas de paz y reconciliación nacional anunciada, siendo los más importantes los acuerdos de libertad incondicional de todos los presos políticos que existían en el país, los programas sociales para los desmovilizados, la reforma agraria, la libertad de prensa hablada y escrita y el libre movimiento de los excombatientes mientras se mantuvieran las negociaciones.

Los acuerdos no se cumplieron, siendo asesinados posteriormente la mayoría de los jefes desmovilizados. Guadalupe Salcedo, el más visible de los jefes guerrilleros liberales sería asesinado el 6 de junio de 1957 por la policía en Bogotá.

2.1.2. La perspectiva de paz de los Gobiernos de Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia Y Julio César Turbay Ayala

El General Rojas fue asumiendo una postura independiente de las dirigencias de los partidos tradicionales, lo cual fue solucionado con la creación del Frente Nacional con en el Acuerdo de Benidor en 1956, el cual pretendió la pacificación nacional,

aludiendo la esperanza de reconciliación de los dos partidos a través de su alternación civilista en el poder. El General Rojas dejaría el poder el 10 de mayo de 1957. Al igual que el régimen militar del General Rojas, la pacificación fue concebida desde la perspectiva de la rendición y la liquidación total de todo foco de resistencia popular.

Durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo se promovió una amnistía a los focos armados persistentes, prometiendo la suspensión de acciones militares contra éstos, procesos y penas contra acusados por delitos políticos. Se crearon instituciones como el Departamento de Rehabilitación para propiciar obras públicas en zonas de conflicto para promover empleo y compensar a los campesinos víctimas de la violencia. Se crearon la Caja Agraria y el INCORA, con el objetivo de emprender la reforma agraria, en aplicación de la Ley 135 de 1961. Simultáneamente se reforzaron la policía y el ejército, se implantó el Estado de Sitio, se fortaleció el sistema carcelario y se establecieron otras disposiciones represivas.

Durante el gobierno de Guillermo León Valencia se pretendió finalizar el proceso de pacificación con la rendición de los focos armados liberales que no se desmovilizaron. Ante el fracaso de la amnistía rendicioncita, la respuesta del Estado fue el ataque a Marquetalia en 1962 sin lograr el objetivo de liquidarlos, radicalizando la posición de éstos, que se transformaron posteriormente en lo que se ha denominado la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-.

El gobierno de Julio Cesar Turbay, se enmarcó dentro de un rígido esquema frente nacionalista, intentando otra amnistía en busca de la paz nacional. La ley 37 de 1981 y el Decreto 474 de 1982 concedieron una amnistía que no comprendía los casos en que los delitos de rebelión, sedición o asonada, fueran conexos con el secuestro, la extorsión, el homicidio cometido fuera de combate, el incendio, el envenenamiento de fuentes de agua y en general los actos de barbarie y ferocidad. Con las experiencias de las últimas amnistías –desde 1902- no hubo persona alguna que se acogiera a tal modalidad de amnistía.

2.1.3. El Gobierno de Belisario Betancourt (1982 – 1986)

El presidente Betancourt incorporó un enfoque diferente al de anteriores amnistías, en el cual se planteó el cese al fuego, la tregua y el diálogo nacional. El cese al fuego con las FARC se inicio el 28 de marzo de 1984 con la firma de una tregua con la Comisión de Paz. Las FARC se comprometieron a abandonar la práctica del secuestro, la extorsión y el terrorismo. Con el M-19 y EPL se firmó el inicio del proceso de paz, el 24 de agosto de 1984 en Corinto-Cauca.

El cese al fuego se firmó sin la condición de entregar las armas por parte de la insurgencia y el reconocimiento de ésta como fuerza política beligerante y no como bandoleros. En el marco de estas negociaciones, se dio la toma del Palacio de Justicia

el 6 y 7 de noviembre de 1985, por parte del M-19 y la retoma por parte las fuerzas militares.

Para viabilizar jurídicamente estos acuerdos se promulgaron las leyes 35 de de 1982 y 49 de 1985, en las cuales no se contempló la indemnización a las víctimas del conflicto, puntualizando que el Estado no asumiría ningún tipo de responsabilidad en este sentido.

En este proceso se fundó el partido político Unión Patriótica (UP), siendo candidato en las elecciones de 1986, Jaime Pardo Leal, el cual registró un porcentaje inferior al 5%, ocupando el tercer puesto en las elecciones presidenciales.

El paramilitarismo desató la persecución contra la Unión Patriótica, asesinando sus principales dirigentes en todo el país, entre ellos Leonardo Posada, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Manuel Cepeda Vargas, Pedro Luis Valencia, Alejandro Cárdenas Villa, Gabriel Jaime Santamaría, Elkin Martínez, Carlos Rojo Uribe, Henry Montenegro, entre otros. Al año 2005, las ONGs de derechos humanos reportaban el asesinato de 3.000 miembros de la Unión Patriótica, estando todas en la impunidad.

2.1.4. El Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990)

Para viabilizar el proceso de paz este gobierno promulgó la Ley 77 de 1989 y el Decreto 206 de 1990, alcanzando el “Pacto Político por la Paz y la Democracia”,

suscrito el 2 de noviembre de 1989, entre el gobierno nacional, los partidos políticos y el M-19, con la mediación de la iglesia católica, acordándose la realización de la reforma constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Así mismo, se acordó la creación de una circunscripción especial de paz, la reforma electoral, el establecimiento de la tarjeta electoral y el voto reservado; así mismo, la ampliación de la representación parlamentaria, el plan de desmovilización, la reinserción social y la dejación de las armas argumentada y soportada jurídicamente con el indulto. Se nombró una Comisión de Seguimiento para concretar y posibilitar los compromisos adquiridos, lo que permitió dar seguridad y protección a los desmovilizados.

2.1.5. El Gobierno de Cesar Gaviria Trujillo (1990 - 1994)

Para viabilizar el proceso de paz este gobierno promulgó los Decretos 213 y 1943 de 1991, la Ley 104 de 1993 y el Decreto 1385 de 1994. Fue el gobierno que logró los más significativos acuerdos políticos de desarme y desmovilización de grupos insurgentes.

2.1.5.1. El primero lo suscribió el 25 de enero de 1991 en el municipio de Ovejas, departamento de Sucre, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

2.1.5.2. El segundo acuerdo político de desarme y desmovilización se realizó con el Ejército Popular de Liberación -EPL- el 15 de febrero de 1991 en Bogotá.

2.1.5.3. El tercer acuerdo de desarme y desmovilización que logró el gobierno de César Gaviria, se suscribió con el Movimiento Armado Quintín Lame, en el Campamento de Pueblo Nuevo, Caldonio - Cauca el 27 de Mayo de 1991.

2.1.5.4. El 9 de abril de 1994 se realizó un acuerdo con la agrupación denominada Corriente de Renovación Socialista (CRS) en Flor del Monte.

2.1.5.5. Otro acuerdo político por señalar fue el realizado con el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, en Cañaveral, en junio 30 de 1994.

2.1.6. Gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998)

Con el objetivo de crear las condiciones políticas y jurídicas para lograr el proceso de paz, el gobierno de Samper expidió las leyes 241 de 1995, 418 de 1997, 434 de 1998 y el Decreto 1247 de 1997. Llevó a cabo el acuerdo con el Movimiento Independiente Revolucionario – Comandos Armados (MIC-COAR), el cual se realizó en la ciudad de Medellín, el 29 de Julio de 1998, en donde se desmovilizaron doscientos (200) hombres.

2.1.7. El Gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002)

Para viabilizar el proceso de paz expidió los decretos 2069 y 2087 de 1998, 127 de 2001 y la Ley 548 de 1999. La política de Paz de este gobierno ha sido la más controvertida de la historia de Colombia, en razón a que planteó condiciones inauditas

a las FARC concediendo una Zona de Distensión de 42.000 kilómetros cuadrados. Allí se realizaron todo tipo de encuentros entre el gobierno y las dirigencias del grupo guerrillero y con representantes de los diferentes sectores de la sociedad civil.

Este proceso no fructificó, porque la agenda acordada fue desarrollada unilateralmente por cada una de las partes en negociación. Así mismo, cada una de las partes se endilgaron recíprocamente falta de voluntad política, acusándose de la culpabilidad del fracaso final. Muy difícil resultaba dialogar bajo el fuego, de modo que los paramilitares intensificaron sus acciones contra la población civil y las FARC exigieron al gobierno el desmonte de estos grupos, arreciando su ofensiva en diferentes partes del país, atacando incluso también a la población civil. Esta etapa de diálogo se caracterizó por la violación de los derechos humanos y del Derecho internacional Humanitario, dándose el incumplimiento de los acuerdos por parte y parte, hasta la declaratoria de su finalización por parte del Alto Comisionado para la Paz Camilo Gómez, el 9 de enero de 2002.

.

2.2. POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS ENTRE 1990 Y 2010 PARA TRATAR EL FENÓMENO PARAMILITAR

2.2.1. En el Gobierno de César Gaviria (1990-1994) se “hizo un importante esfuerzo por definir una “estrategia integral contra la violencia” (García Peña, 2004-2005) que empezó a reconocer elementos de distinción de los diversos factores generadores. No obstante, en la práctica, al fenómeno paramilitar lo continuó tratando exclusivamente como componente del narcoterrorismo. Por ello, su política de sometimiento a la

justicia se extendió tanto a los narcotraficantes como a los grupos de la llamada “justicia privada”. La prioridad que se le dio a la lucha contra el Cartel de Medellín hizo que se descuidara al crecimiento de los paramilitares, como la organización de los hermanos Castaño e igualmente a otros carteles de la droga, como el de Cali”. (Peña & Jaramillo, 2005, Vol 18, p. 58-76).

En Junio de 1991 se entrega voluntariamente el capo Pablo Escobar en la ciudad de Medellín en las horas de la mañana, estando en compañía del padre Rafael García Herreros, siendo llevado a la Cárcel La Catedral de Envigado. En esta prisión estaban reclusos Carlos Aguilar Gallego, Johnny Rivera, José Fernando Ospina, Otoniel de J. González, Carlos Díaz, John Jairo Velásquez, Valentín de J. Taborda, John Jairo Betancourt, Roberto Escobar Gaviria, Alfonso León Puerta, Gustavo González Franco, Jorge Eduardo Avendaño, los hermanos Ochoa entre otros.

Pablo Escobar obtiene de la Asamblea Nacional Constituyente que la extradición sea abolida, plasmándose en el artículo 35 de la Constitución Política de 1991 en donde se predicaba: “Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento”; con este criterio se consolida en nuestro país el fortalecimiento del narcotráfico, apareciendo el Estado respetuoso de los derechos fundamentales y protector de las garantías para sus nacionales.

Se desató entonces una cruenta guerra en la que se encontraban por un lado los aliados de Pablo Escobar, que eran, el Arete, El Osito, Tyson y el Angelito; por el otro los hermanos Castaño, Henry Perez, Mycky Ramírez, Gustavo Upegui, los sobrevivientes de los Moncada y Galeano, el cartel de Cali con Pacho Herrera, Nelson

Urrego, Orlando Henao, Chepe Santacruz, los Hermanos Rodríguez Orejuela a la cabeza quienes conformaron los PEPES y ayudaron al Gobierno a dar de baja a Pablo Escobar, el día dos (2) de Diciembre de 1993.

2.2.2. En el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), hubo muchos problemas por las relaciones con el narcotráfico, debido a la muerte de Pablo Escobar, los grupos paramilitares tuvieron un crecimiento y dominio de las zonas dejadas por el Capo, buscando nuevas estrategias y alianzas para lograr el dominio territorial.

Esto último es lo que efectivamente sucedió, ya que se promovieron de manera masiva, grupos armados al margen de la ley, sin ningún control real, ni estrategia alguna, lo que desencadenó directamente en el fenómeno delictivo actual, en donde estos grupos se fortalecieron económica y militarmente apoderándose de gran parte del territorio nacional, con el respaldo abierto y “legal”, para poder actuar y armarse con el patrocinio y apoyo institucional del Estado Colombiano, siendo este el origen del “nuevo” paramilitarismo en Colombia.

En noviembre de 1994 surge la iniciativa del Ministro de Defensa Fernando Botero de crear las Cooperativas de Seguridad Rural, llamadas “**Convivir**”, las cuales se legalizaron a través del Decreto N° 356 de 1994 con la figura de *Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada*, para aquellos lugares donde el Estado no podía garantizar la seguridad de los ciudadanos, dándose fuertes debates al interior del gobierno, que evidenciaron falta de unidad de criterios y enviaron señales contradictorias a la nación.

Es preciso determinar cómo la Resolución 2852, emitida el día ocho (8) de Agosto de 2006 por el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, señor Blas Agustín Quijano Melo, reglamenta los objetivos generales de estas nuevas organizaciones civiles armadas en cualquiera de las modalidades en que se desarrolla esta actividad, para disminuir y prevenir las amenazas que afectan o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de los legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección.

En teoría se buscaba que estos grupos protegieran y evitaran la violación a derechos humanos de las personas que habitan el territorio nacional, pero en la realidad estos grupos se convirtieron en los mayores perpetradores de violación de los derechos humanos.

En el ejercicio de mi labor de Defensoría Pública en el marco de la ley de Justicia y Paz, ha sido oprobioso e insultante comprobar que estos homicidas se burlan de las víctimas y muchas veces se les ve la alegría por haber masacrado familias completas de la forma más desalmada y sin compasión alguna.

Por otro lado, la ley 241 de 1995 estableció la distinción del término “autodefensas”, amplió los mecanismos de sometimiento y generó la posibilidad de reinserción para sus miembros.

En el año 1997 se realizó una reunión nacional de comandantes de las Autodefensas Campesinas y se reorganizan las AUC, teniendo como modelo lo

acontecido en Urabá, que es prácticamente el mismo de Puerto Boyacá. Se intentó conformar un movimiento nacional unificado bajo el mando de Carlos Castaño, pero existiendo autonomía de sus respectivos miembros en sus correspondientes zonas.

Alfredo Rangel ha manifestado que “la insurgencia comenzó a poner en práctica la nueva forma de operar, según la cual dejarían de esperar al enemigo para emboscarlo ya y que en su lugar irían en pos de él para buscarlo, asediarlo y coparlo”. (Rangel, 1999, p. 23).

En 1997, mediante el decreto 2895 se estableció: “Que el fenómeno de los grupos de autodefensa, organizaciones de justicia privada, bandas de sicarios y escuadrones de la muerte se ha incrementado en el país, de modo que se exige el fortalecimiento de las acciones del Estado contra tales grupos”; en este mismo decreto se ordenó la creación de un “Bloque de Búsqueda” para perseguir a los líderes paramilitares, el cual tendría que coordinar las acciones tendientes a combatir a las autodefensas, organizaciones de justicia privada, bandas de sicarios y escuadrones de la muerte.

La ley 418 de 1997, creó la vía jurídica para que el Estado colombiano tuviera disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley, a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica. Se da aplicación a estos beneficios jurídicos tanto a guerrilleros como paramilitares, manteniendo la figura de la reinserción para los grupos que se acojan a esta ley, buscando la paz y la desmovilización de estos delincuentes.

2.2.3. El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) tuvo como propósito central dar inicio al proceso de paz con las FARC. Desde un comienzo este gobierno asumió una lucha real y efectiva contra los paramilitares para controlar su crecimiento y también como base de la política de paz, como lo manifestó Víctor G. Ricardo el día de su posesión en el cargo de Alto Comisionado para la Paz. En este período de Gobierno se da inicio al proceso de paz sin cese al fuego y se establece una zona de despeje, creada en 1998, de acuerdo a lo convenido, para facilitar las negociaciones de paz con las FARC, que pidieron la desmilitarización del área como requisito para llevar a cabo el proceso de paz. El ejército no ocupó la zona hasta que las conversaciones se rompieron el 20 de febrero de 2002. La zona de distensión comprendió cinco municipios: Mesetas, Vista Hermosa, Uribe y La Macarena en el departamento de Meta, y San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá.

Con relación a la política de paz, el Gobierno de Pastrana dejó abierta la posibilidad para que ingresaran los grupos paramilitares a este diálogo. Éstos últimos no se interesaron, expresando que el Estado colombiano los estaba dejando en una posición de indiferencia. El 7 de enero de 1999, un día después de la instalación del proceso de paz con las FARC, los grupos paramilitares lanzaron una cruenta “ofensiva” de masacres. En 1999 nace el Bloque Calima, como reacción a los ataques de la insurgencia. De todas formas, nunca se realizaron contactos formales entre representantes del Gobierno con la comandancia de las AUC durante el cuatrienio de Pastrana.

El 13 de Abril de 1998, Carlos Castaño envía un documento al Comité Internacional de la Cruz Roja, con copia para la Comisión de Conciliación Nacional y La Revista Cambio 16, para efectos de la elaboración de la separata “La paz sobre la mesa” la cual fue publicada el día 11 de mayo de 1998, en la cual plasma su visión del estado del conflicto armado interno.

Más tarde, surgen nuevos grupos de la misma especie financiados por dueños de la tierra en la zona del Magdalena Medio, Sur del Cesar, etc.; estos grupos con el tiempo fueron evolucionando hacia lo que son hoy pasando de las simples acciones de autodefensa contra las acciones de la insurgencia, a un accionar ofensivo, donde su operatividad, se asemeja militarmente a la de la guerrilla: copamiento de campamentos insurgentes, asesinatos de activistas de izquierda, acciones de masacres contra población civil que ellos aducen ser base de la guerrilla, etc.

Acorde a lo anterior, es posible leer de esa realidad, el nexo de los paramilitares con los narcotraficantes y con los terratenientes, pero, también con población civil afectada por el accionar insurgente, es decir, que podrían tener una alianza con cualquier sector real como social, político y económico.

Aunque también existían diferencias entre ellos, las FARC pidieron el desmonte del paramilitarismo, y este a su vez, dice que enfrenta políticamente al Estado por incompetente y por el incumplimiento de sus funciones constitucionales; las posiciones

acerca del secuestro y del mismo narcotráfico entre otras, no cabe duda, que son muchas más las similitudes que las diferencias.

En marzo de 2000, Carlos Castaño aparece en una entrevista realizada por Claudia Gurisati del canal RCN, en donde se mostró como el comandante de las AUC, en la cual manifestó que los guerrilleros eran objetivo militar, estuvieran de uniforme o de civil.

Posteriormente Alfredo Rangel en marzo de 2001, respecto del crecimiento de los paramilitares dijo:

Hoy los paramilitares les sirven a todos los que quieren comprar un poco de seguridad a través de sus servicios mercenarios; mañana podrían convertirse para muchos en una especie de grupo contra eventuales resultados indeseables de la negociación política entre el Estado y la insurgencia. Para mucha gente poderosa ya no sería sólo una opción de fuerza frente a la depredación de la guerrilla, sino una opción política contrainsurgente, decidida a interferir en la negociación de paz. (Rangel 2003, p. 281).

Finalizando el gobierno de Pastrana en el año 2002, Richard Maok Riaño,¹ “quien había trabajado durante 2 años y 4 meses en la Fiscalía como asistente administrativo grado III en el CTI (1999 a 2002), presentó un informe que demuestra la existencia de 54 interconexiones entre números telefónicos de empleados de la Fiscalía y líderes paramilitares de diversas regiones del país. También descubrió conexiones entre paramilitares y miembros del Ejército, de la Policía, del DAS y del

¹ Ex investigador del CTI, despedido por Osorio. En los círculos judiciales es recordado como el hombre que logró establecer dónde se originaban los mensajes de las Farc y otros grupos ilegales. Gracias a él, en 2003 fue posible establecer que Ana María Flórez, amiga de Osorio y entonces directora seccional de fiscalías en Norte de Santander, y su asistente Magali Moreno, estaban al servicio de una red controlada por un jefe paramilitar conocido como Iguana. Flórez y Moreno son prófugas de la Justicia. La información que aportó podría comprometer por lo menos a 50 funcionarios.

Congreso. El Fiscal Osorio lo destituyó, hizo allanar su casa y lo sometió a investigaciones, cuando se enteró de sus descubrimientos. Cuando dicho investigador se vio asediado por amenazas de toda índole, tuvo que salir del país.

Según Javier Giraldo, 2003, “las actuaciones concretas de la Fiscalía concuerdan con estos hallazgos, así como la exoneración de líderes paramilitares y de grandes promotores del paramilitarismo, como Carranza, el ex Ministro Carlos A. Marulanda, los Generales Del Río, Millán, Uscátegui; la no apertura de investigaciones en numerosísimos casos que involucran a militares y paramilitares”. (Giraldo, 2003).

Por el contrario, la facilidad y arbitrariedad con que se abren procesos contra líderes populares con testimonios montados. Ver también informe de HRW del 8 de noviembre/02 (El Tiempo, 09.11.02, pg. 1-18: 26 funcionarios removidos o que renunciaron desde llegada de Osorio, por presiones contra su autonomía investigativa).

2.2.4. Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2010)

Lo más claro de la política de paz del gobierno de Uribe Vélez fue no dialogar con grupos insurgentes, declarándoles la guerra total, asumiendo una postura de franca crítica y cuestionamiento al gobierno de Andrés Pastrana en este sentido. A su vez, definió desde el comienzo, buscar el diálogo y la negociación con los grupos paramilitares.

Es preciso señalar que lo que dice buscar el Gobierno es proteger todos los derechos de los colombianos y fortalecer con base en la solidaridad el Estado de Derecho y la institución de la democracia, cuando se vea amenazada.

Para lograr el cometido de la Seguridad Democrática el Ministerio de Defensa desarrolló los siguientes objetivos estratégicos:

a. Consolidación del Control Estatal.- 1. Que exista presencia gubernamental en todo el territorio nacional. 2. Aumento de la judicialización de los delitos con mayor impacto social. 3. Extensión y fortalecimiento de la administración de justicia. 4. Disminución de las denuncias por violaciones de derechos Humanos.

b. Protección de la Población. 1. Acabar los grupos al margen de la ley. 2. Reducción de las conductas punibles de secuestro, extorsión y homicidio. 3. Prevenir el desplazamiento forzado. 4. Reincorporar a la comunidad a los miembros de los grupos armados al margen de la ley, que deseen desmovilizarse.

c. Eliminación del Comercio de Drogas Ilícitas en Colombia. 1. Interdicción aérea, marítima y terrestre, respecto del tráfico de drogas e insumos. 2. erradicación de cultivos ilícitos. 3. Desarticulación de las redes de narcotraficantes. 4. Incautación de Bienes y finanzas del narcotráfico.

d. Mantenimiento de una capacidad disuasiva. Buscando proteger las fronteras terrestres, marítimas y fluviales.

e. Eficiencia, Transparencia y Rendición de cuentas. 1. Optimización de los recursos.
2. Generación de Ahorro mediante la revisión de las estructuras y los procesos administrativos.

Aparte de ello, se consagraron las redes de informantes; las redes de cooperantes; programas de recompensas, los soldados campesinos; la vinculación de las empresas de seguridad privada a la estrategia; las zonas de rehabilitación; las recompensas monetarias y la cooperación internacional.

Todas estas estrategias siguen funcionando y se han publicitado intensamente con el afán de dar sensación de efectividad.

Se pudo observar por los medios de comunicación cómo el Gobierno estaba cumpliendo con la entrega de las recompensas prometidas, logrando así que ese sistema fuera efectivo y esto impulso la desertión de los miembros de grupos al margen de la ley, como la baja de miembros de la cúpula del secretariado de las FARC y la captura de los grandes capos de la droga.

En mi ejercicio profesional en la Defensoría Pública, he podido observar que existen informantes mentirosos que buscan intereses personales o del grupo delictivo

al que pertenecen, puesto que dan testimonio de personalidades de orden nacional con la única finalidad de acabar con los grupos ilegales.

En diciembre 2002 se promulgó el Decreto 3222 en el cual se define a las redes de apoyo y solidaridad ciudadana como:

El conjunto de actividades organizadas, canalizadas y lideradas por la Policía Nacional, con la finalidad de captar información sobre hechos, delitos o conductas que afecten o puedan afectar la tranquilidad y seguridad, aprovechando los recursos técnicos y humanos que poseen las personas naturales o jurídicas que prestan los servicios a que se refiere el Decreto Ley 356 de 1994". "Que integra a las empresas de vigilancia privada a la estrategia de seguridad. Las obliga a colaborar con la fuerza pública suministrando información y poniendo a su disposición todos los recursos técnicos y sus bases de datos. Se trata de 4.200 empresas registradas, con 160.000 trabajadores, que según la Contraloría Delegada para la Defensa, Justicia y Seguridad, le generan a los particulares 3.5 billones anuales, la mayoría de ellas dirigidas por militares en retiro. (El Espectador, Noviembre 2002, pg. 5 A; El Tiempo, Diciembre 2002, pg. 1-14).

El Ejército Nacional en ejercicio de la Seguridad Democrática, se ha visto en la necesidad de hacer presencia en aquellos municipios que eran vulnerables a los ataques y violaciones de derechos a la comunidad por parte de grupos al margen de la ley y se dio origen a 562 pelotones de soldados campesinos.

El Ejército Nacional incorporó hoy a sus filas a 10.116 soldados campesinos dentro de la segunda fase de este programa que busca incrementar el pie de fuerza y la presencia del Estado en todo el territorio nacional. Los soldados campesinos, que operarán en las regiones de donde son oriundos o donde viven actualmente, fueron asignados a los departamentos de Boyacá, Santander, Magdalena, La Guajira, Bolívar, Atlántico, Cesar, Cauca, Nariño, Quindío, Valle, Putumayo, Caquetá,

Antioquia, Chocó, Caldas, Tolima, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Vichada, Casanare, Norte de Santander, Huila, Córdoba y Sucre". (Presidencia de la República, 2002)

El Gobierno de Uribe impulsó el otorgamiento de amnistías generalizadas e incondicionales a todo aquel que demostrara su condición de miembro de las AUC o de las otras organizaciones paramilitares incorporadas al proceso. Para ello, promulgó el decreto 128 de 2003, el cual faculta al Comité de Dejación de las Armas (CODA) para otorgar perdón por "delitos políticos y conexos", con total discrecionalidad y sin ninguna clase de control judicial.

La creación de un procedimiento que de hecho funciona secretamente, garantizará que la mayoría de los miembros de los grupos paramilitares, que debido a las limitaciones del sistema judicial no han sido investigados penalmente, o cuyos delitos puedan ser homologados a "actos de sedición", dispondrán de un camino expeditivo para obtener la amnistía o el indulto sin que los órganos de investigación o de justicia ni las víctimas y sus representantes legales estén en la posibilidad de intervenir. (Cepeda, 2003,).

Con el Presidente Álvaro Uribe, a partir del año 2002, comienzan las AUC a manifestar una propuesta de desmovilización, lo que el Gobierno observó con buenos ojos y concretó en el acuerdo de Santa Fe de Ralito, en julio de 2003, en donde se estableció entre otras cosas:

Definir como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Las AUC reiteran que su mayor aporte a la nación en este momento histórico es avanzar

hacia su reincorporación a la vida civil y contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Las partes se comprometen en este proceso, conscientes de dar un paso que aporta de manera efectiva a la construcción de la autentica paz que espera y merece la nación colombiana”. (Acuerdo Santafé de Ralito, 2003).

Importante en este acuerdo fue el hecho de corregir los errores cometidos en la negociación con las FARC, ya que aquí se logra el acuerdo de cese de hostilidades, dejar el negocio del narcotráfico, la desmovilización, la entrega de armas y de menores, entre otras.

Rafael Pardo, intenta dar una explicación a esta posición actual del paramilitarismo, en donde plantea tres factores que son:

- 1) Que el Gobierno de Uribe les generaba confianza suficiente para concretar aspectos críticos de su desmovilización – como el tratamiento político, que Uribe planteó que fuera similar al de las guerrillas; como el tratamiento jurídico, que el Gobierno llevó al Congreso como ley de alternatividad penal; como el tratamiento militar, puesto que la política de seguridad democrática creaba las condiciones de seguridad en las zonas, de modo que el paramilitarismo no fuera necesario para proteger las regiones-; 2) El tema de la extradición – el Gobierno de Estados Unidos, a pesar de varias manifestaciones públicas de jefes paramilitares sobre su disposición a combatir el narcotráfico, empezó en 2002 a procesar solicitudes de extradición contra estos jefes , lo que sin duda llevó a buscar una negociación con el Gobierno Colombiano - ;3) Las autodefensas comprendieron que su proyecto estaba estratégicamente derrotado – podían seguir creciendo y controlando territorios, acumulando riquezas y tierras, pero, en lo esencial, no irían a provocar la derrota de las FARC”. (Pardo, 2004).

Respecto de los factores expuestos por Rafael Pardo considero lo siguiente:

- Es cierto que el Gobierno de Uribe le dio confianza a los grupos al margen de la ley para que se desmovilizaran, obteniendo una pena mínima de cinco (5) años y una máxima de (8) años, que cumplirían en un pabellón especial para ellos, con prebendas y privilegios que les hicieran más llevadera su privación de la libertad.
- El punto de la extradición, llamo la atención de los jefes paramilitares siempre y cuando dejaran de delinquir posterior a su desmovilización, pero esto no sucedió y fueron extraditados, dejando a un lado los compromisos con las víctimas del conflicto armado.
- En cuanto al argumento que las autodefensas estaban destruidas y que pensaban que no acabarían a las FARC, no resulta creíble ya que los paramilitares se encontraban en uno de los mejores momentos como grupo armado al margen de la ley, asestándole a las guerrillas colombianas fuertes golpes, arrebatándoles zonas bajo su control, hasta el punto de desplazarlos de las mismas, por lo que resulta más verosímil pensar que los paramilitares se desmovilizaron con la esperanza de lograr un cambio que los condujera legalmente a compartir el poder, en lo que ellos llamaron, “refundar la nación”.

La promulgación de la ley 782 de 2002 modifico la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, dictó disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de

acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los Colombianos y la convivencia pacífica.

Adicionalmente con esta ley se concede el beneficio de indulto para los condenados por hechos constitutivos de delito político o delitos conexos ó se desmovilicen y demuestren su interés de regresar a la convivencia civil. Al respecto lo dijo la Corte Constitucional.

En el mes de Diciembre de 2006, en el informe del Colegio de Abogados Colombiano “Jose Alvear Restrepo” dice: “La tesis de Uribe Vélez, es que en Colombia no hay un conflicto social y armado sino una lucha del Estado contra el terrorismo, simplificando la realidad histórica y desconociendo el derecho internacional humanitario. Desde esta perspectiva ha implementado la llamada “política de seguridad democrática” cuya prioridad de una parte, ha sido buscar la derrota militar a las guerrillas, destinando gran parte del presupuesto nacional a través del Plan Colombia, para fortalecer las Fuerzas Militares, y por la otra, otorgar grandes beneficios e impunidad a los miembros de los grupos paramilitares, quienes se encuentran en una etapa de metamorfosis y consolidación a todo nivel. (Corte Constitucional, Sentencia C-928, 2005).

El gobierno colombiano comenzó el proceso de negociación con las AUC en 2002. El Proyecto de Ley Estatutaria N° 85 Senado presentado por el Gobierno Nacional el 23 Octubre de 2003, planteó que su importancia se daba en procura de la reincorporación de miembros de grupos armados que contribuyeran de manera efectiva a la consecución de la paz nacional.

El 15 de enero de 2004, se instalan en el Congreso de la República las audiencias públicas de concertación para superar el fenómeno del paramilitarismo –

autodefensas, convocadas por la Comisión de Paz del senado y por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República. En dichas audiencias se escucharon distintas perspectivas sobre el fenómeno paramilitar y, en particular, sobre los aciertos y desaciertos del proyecto de ley presentado por el Gobierno.

Luego de recibir las notificaciones del gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación, suspendió el 27 de julio de 2004, las órdenes de captura que existían contra los sindicados Iván Roberto Duque Gaviria, Ramón Isaza Arango y Salvatore Mancuso Gómez, garantizando la impunidad de sus crímenes.

La decisión judicial se produjo con el fin de facilitar la llegada al Capitolio Nacional de los voceros de las autodefensas campesinas, a propósito de las negociaciones de paz que adelantaban con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, gesto político que les otorgaba “legitimación”.

En ponencia favorable del Proyecto de Ley N° 211/05 Senado – 293/05 Cámara, se refería así a la iniciativa gubernamental:

En Colombia, la presencia de grupos armados organizados al margen de la ley, cuyas acciones atentan contra la legitimidad de las instituciones, hace necesario e inaplazable acudir a procedimientos especiales que permitan y faciliten la reincorporación a la sociedad de las personas que conforman estos grupos, contribuyendo a lograr la pacificación del país. En tal virtud, se requiere buscar alternativas, entre las cuales se cuentan las vías jurídicas, para lograr la consecución y el mantenimiento de la paz atendiendo los postulados del derecho constitucional e internacional. Paz que el Constituyente de 1991 consagró como un derecho y un deber de obligatorio

cumplimiento; razón por la que se erige en el gran propósito nacional y objetivo central del Estado Social de Derecho que nos rige.

La paz es condición necesaria para poder disfrutar de los demás derechos y promover el progreso, el bienestar y la democracia plena; razones por las cuales el Gobierno Nacional en desarrollo de su Programa de Seguridad Democrática, cuyo propósito es alcanzar la paz combinando con precisión el uso legítimo de la fuerza y la vía dialogada, acompaña a la sociedad, a las diferentes instituciones y al honorable Congreso de la República, en la realización de acciones enderezadas a conseguir tan preciada finalidad. Con iniciativas similares en su objetivo a la que se propone, en años recientes, se ha disminuido el número de los actores armados y consecuentemente la intensidad de la violencia que azota al país. (Ponencia Favorable Proyecto de Ley N° 211/05 Senado – 293/05 Cámara).

Luego de procesar muchos inconvenientes para iniciar el diálogo y en el desarrollo de la negociación, finalmente se protocolizó el acuerdo de Santa Fé de Ralito, con las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, el día 15 de julio de 2003, acordando en lo fundamental lo siguiente:

El cese de hostilidades y la reincorporación a la vida civil de los miembros de las AUC y la desmovilización de su estructura militar, dándoles varias garantías, programas e indemnizaciones, procesos cortos y bajas penas a través de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz. Para el proceso de la reinserción de los desmovilizados se buscaría apoyo financiero de la comunidad internacional.

El Congreso de la República aprobó la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz el 22 de Junio del mismo año.

Se puede afirmar que no toda la estructura paramilitar de las AUC se desmovilizó ni se desarmó, subsistiendo grupos armados que posteriormente cambiaron su denominación como Águilas Negras y Bandas Criminales -BACRIM-los cuales han continuado su actividad criminal contra la población civil. También se puede afirmar que las zonas en donde las AUC dejaron de operar nunca fueron protegidas ni tomadas por las fuerzas militares en representación del Estado colombiano.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ 975 DE 2005

3.1. Antecedentes legislativos de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz y las adecuaciones legales de favorabilidad para los grupos paramilitares

Antes de la sanción de la Ley 975 de 2005, en Colombia el proceso de desmovilización de grupos y personas de grupos armados al margen de la ley se registraron los siguientes desarrollos normativos:

- Acuerdo de la Uribe-Meta de Perdón y Olvido con las FARC, 1984.
- Acuerdo de Indulto con el M19, 1990.
- Ley 07 de 1992. Reindulto con el M19, sobre el Palacio de Justicia.
- Pacto de Consolidación del Proceso de Paz con el EPL, M19, QUINTÍN LAME y PRT, 1993.
- Ley 418 de 1997. Facilitación de suscripción de acuerdos con grupos armados al margen de la ley.
- Ley 548 de 1999. Modificación y prórroga de la ley 418 de 1997.
- Ley 782 de 2002, reglamentada mediante los Decretos:
 - Decreto 128 de 2003. Aclaratoria de la política de reincorporación a la vida civil.
 - Decretos 3360 de 2003 y 2767 de 2004.

3.2. Sobre la Justicia Transicional y Restaurativa

La idea de este trabajo es mencionar directrices generales que vislumbren posibles parámetros encaminados a aportar algunos elementos nuevos al logro de la paz en el país.

Desde mi visión como defensor público considero que lo más importante, además de darle fuerza jurídica y constitucional al logro de la paz, es corregir y subsanar las causas de la violencia en Colombia, enunciadas en acápite precedentes. Así mismo, lograr establecer de qué manera Colombia está cumpliendo con los estándares internacionales sobre derechos humanos, la aplicación efectiva de la justicia y la lucha contra la impunidad.

Se ha entendido que la Ley 975 de 2005 es una norma jurídica aplicable en el marco de la justicia transicional, figura así definida por Rodrigo Uprimi y Maria Paula Saffón:

La justicia transicional hace referencia a aquellos procesos transaccionales mediante los cuales se llevan a cabo transformaciones radicales de un orden social y político determinado, que enfrentan la necesidad de equilibrar las exigencias contrapuestas de paz y justicia. (Uprimi y Saffón, 2005)

No es posible la Justicia Transicional contrariando el derecho internacional de los derechos humanos, el cual ha enfatizado aspectos específicos, que según Botero M. y otros deben cumplirse de la siguiente manera:

1. El aumento sustantivo de las obligaciones de los Estados en materia de defensa y garantía de los Derechos Humanos; 2. El establecimiento de la responsabilidad penal individual por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario; 3. La ampliación y fortalecimiento de los mecanismos internacionales de garantía del cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario; y 4. La extensión de la protección internacional de los derechos. (Botero M, 2005).

Estas formas de buscar la paz, resultan muy complicadas cuando se observa que el victimario es una persona o grupo al margen de la ley que ha cometido infinidad de delitos de lesa humanidad y crímenes atroces, siendo preciso darles premios que los motiven a cesar en sus actividades y muchas veces como en nuestro caso, concederles penas muy cortas de privación de la libertad, como también beneficios de no extradición, siempre y cuando no sigan cometiendo ningún delito y su desmovilización sea real.

A propósito de la Justicia Restaurativa, Rodrigo Uprimi y Maria Paula Saffón plantean que:

Una perspectiva de cómo ésta encuentra justificación en el hecho de que el castigo retributivo del ofensor es visto como insuficiente para restablecer la convivencia social pacífica, pues no toma en cuenta los sufrimientos y las necesidades de la víctima, ni permite la adecuada reincorporación del delincuente a la comunidad. En ese entender, el paradigma restaurador pretende centrarse en el futuro y no en el pasado y, al hacerlo, lejos de basarse en la evaluación de la culpa del ofensor, le otorga una importancia fundamental a la búsqueda de aquellos mecanismos a través de los cuales éste puede adquirir conciencia acerca del daño que causó, reconocer su responsabilidad e intentar reparar ese daño. (Uprimi y Saffón, 2005).

De esta manera se observa que lo que se pretende adicionalmente de la paz, es el hecho de que el victimario participe realizando trabajos a favor de la comunidad y en terapias psicológicas, en donde se trate directamente su problema y pueda ingresar a una sociedad como una persona servicial a la misma, resaltando sus valores interiores y exteriores, entendiendo que tiene unos derechos que el Estado hará lo posible por garantizárselos y que los demás miembros de la comunidad tienen los suyos propios que deben ser respetados.

Al respecto, los autores anteriormente mencionados manifiestan que:

En este entender, la Justicia Restaurativa le otorga a la Justicia Transicional un importante grado de legitimidad y, lo que es más importante, mantiene en ella la centralidad de los derechos humanos, pues si bien el derecho de las víctimas a la justicia es sacrificado de manera importante, lo es en pro de la garantía de los derechos de las mismas a la verdad y a la reparación. (Uprimi y Saffón, 2005).

En el preámbulo de la ley 975 de Justicia y Paz, se establece que: “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos *armados organizados al margen de la ley*, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. Aquí ya se señala qué es lo que se busca y cuál es la finalidad de acuerdo a la normatividad estipulada.

El objeto de esta ley es “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

3.3. El real alcance de la Verdad, Justicia y Reparación

3.3.1. Valoraciones sobre la verdad

Jurídicamente, dentro del contexto de la Ley 975 de 2005, la verdad es el derecho a conocer los hechos sucedidos y las circunstancias que movieron a los victimarios a la comisión de esos crímenes, cuya finalidad es preservar del olvido a la memoria colectiva y obtener un recurso judicial efectivo.

Este principio es el más importante dentro de este proceso de Justicia y Paz porque se refiere al hecho de que las víctimas tienen este derecho a “conocer la verdad

sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada...”

Se establece para que tanto las víctimas como la sociedad entera tengan el derecho real y efectivo de saber cuál fue la suerte que tuvieron sus familiares, amigos o ciudadanos colombianos que se han visto afectados por la violencia, exigiendo en términos reales la publicidad del mismo; desde mi ejercicio como defensor público he corroborado que esto no se ha venido cumpliendo, ya que la Fiscalía delegada para estos asuntos considera todo lo contrario, no permitiendo que la versión de los procesados sea transmitida en vivo y directo por los diversos medios masivos de comunicación.

Sorprendentemente los funcionarios delegados de la fiscalía manifiestan que no pueden permitir la amplia difusión de la verdad, ya que se vulneraría la reserva sumarial; ¿cuál reserva?, si nos encontramos frente a un proceso especial, en donde no se deben colocar trabas, ni obstáculos al desarrollo del mismo y mucho menos al ocultamiento de la verdad a las víctimas.

La otra disyuntiva versa en torno a ¿cuál es la verdad que se busca en este proceso?; será que ésta es el producto de la impunidad existente en nuestro país, en donde el ente investigador no sabe a ciencia cierta quién es víctima, ni quién es el victimario, ni cuántas personas han sido asesinadas y desaparecidas; tampoco se tiene establecido con precisión cuántos grupos al margen de la ley existen.

En los diversos procesos he podido observar como los distintos postulados cuando se les pregunta sobre la muerte o desaparición de las personas dentro del territorio en donde ejercieron su “poder” y dominio, su respuesta no se sale de una justificación determinada, como es: eran auxiliares de la guerrilla, eran guerrilleros, eran viciosos, eran ladrones, eran prostitutas, eran homosexuales, etc. Evidenciándose que estos grupos al margen de la ley se dedicaron a realizar una presunta limpieza social, ya que al parecer todos los muertos y desaparecidos eran personas de mala reputación, juicio a priori que no es cierto, ya que la verdadera causa era no compartir sus ideales o mejor aún no colaborar con las actividades solicitadas.

Esto ha generado indignación por parte de las víctimas dentro del proceso, ya que en la mayoría de los casos, los muertos y desaparecidos eran hombres cabeza de hogar y sus hijos mayores, muchachos con retardo mental, ó simplemente jóvenes menores de edad que no querían entrar a formar parte de estos grupos al margen de la ley, nunca los delincuentes que ellos mencionan; entonces será que se está cumpliendo con la verdad dentro de este proceso especial ó simplemente, como nadie sabe ni se tiene prueba de nada, porque las personas que investigaban las causas de la ocurrencia de las conductas punibles eran amenazadas y si persistían con sus averiguaciones, posteriormente las asesinaban, a la sazón la verdad es la que determinen a su libre arbitrio, estos señores que son llamados a responder en la ley de Justicia y Paz.

En este punto es preciso señalar que los grupos al margen de la ley, están en la obligación social, moral y legal de revelar la verdad histórica de cuáles conductas punibles realizaron y de indicar cuál fue la suerte que tuvieron las personas retenidas por el grupo, circunstancia necesaria para poder acceder a los beneficios contemplados en esta ley.

La Corte Constitucional al respecto ha dicho: “El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (principios 1° a 4) incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber”.

El primero comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo, consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Y el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.

El derecho a la verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”, y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte.

Proyectando estos principios en el ámbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha determinado que “el derecho de acceder a la verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima”. (Corte Constitucional. Sentencia C-454/06).

3.3.2. Valoraciones sobre la justicia

La ley de Justicia y Paz establece que “el Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos al margen de la ley...”

De acuerdo a lo anterior, en el marco del proceso de justicia y paz en Colombia, se entiende por Justicia el ejercicio real de realizar una investigación integral, en donde no vaya a presentarse la impunidad y se sepa a ciencia cierta la verdad histórica que tanto desean escuchar las víctimas directas e indirectas, individuales y colectivas, que conlleve a judicializar a los miembros de los grupos armados al margen de la ley, respetando el debido proceso que se ha establecido para tal efecto.

La Corte Constitucional ha manifestado al respecto:

El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad. Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso. (Corte Constitucional, Sentencia C-454/06).

Así mismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso penal, y el derecho a participar en el proceso penal, por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo. Esta participación se expresa en que los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y

tendrán derecho a presentar otras pruebas. (Corte Constitucional, Sentencia C-454/06).

3.3.3. Valoraciones sobre la reparación

Dentro de la ley 975 de 2005, la Reparación consiste en el derecho que tienen las víctimas del conflicto armado, para que se les indemnice integralmente todos los perjuicios ocasionados, en forma de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Es por esto que, la ley de Justicia y paz nos señala a este respecto que: “el derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción...”

En este sentido, desde mi ejercicio profesional de defensor público he podido establecer lo siguiente:

Restitución: Se busca dejar a la víctima en la situación anterior a la época de la ocurrencia del delito, aspecto imposible de realizar cuando se hable de homicidio o desaparición forzada. Inclusive, tratándose de desplazamiento forzado, cuando a las víctimas ya no les interesa –por temor- regresar al seno de sus parcelas o veredas.

Indemnización: Resarcir el daño causado o perjuicio ocasionados, mediante el pago de una determinada suma de dinero. Observándose que ninguna cantidad de numerario puede devolver una vida, una invalidez o una desaparición.

Rehabilitación: En donde se trata de dejar a las víctimas que hayan quedado con traumas físicos y psicológicos como se encontraban antes de la ocurrencia del delito, lo cual se lograría con tratamientos psicológicos serios y con la atención médica de alta tecnología para cirugías y prótesis.

Satisfacción: Dentro de la ley 975/05, se trata de restablecer la dignidad humana y de difundir la verdad. Pero, ¿quedarán contentas y complacidas las víctimas que han perdido a sus seres queridos con recibir una determinada suma de dinero o con escuchar el término perdón por parte de los victimarios o con la pena de ocho años de prisión a que serán condenados?

Garantías de no repetición: Se logra con la desmovilización individual y colectiva del grupo al margen de la ley, el desmantelamiento del mismo y especialmente la promesa y realidad de no reanudar sus actividades ilegales. Pero resulta inocultable la realidad según la cual el paramilitarismo continúa operando en el país bajo otros nombres, lo cual pone en duda esta forma de reparación.

El derecho de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo, también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima y comprende, como ya se indicó, la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance

general como la adopción de disposiciones encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas.

La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación.

Al respecto la Corte Constitucional ha señalado:

Así, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos, en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a recursos del Estado para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas de los delitos. (Corte Constitucional. Sentencia C-370/06).

A este respecto, el Gobierno Nacional promulgó el Decreto 1290 de 2008, creando el Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados organizados al margen de la ley.

3.4. La Verdad, Justicia y Reparación en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha producido informes precisando los conceptos de verdad, justicia y reparación dentro de procesos de tránsito o restablecimiento de la paz y/o la democracia. Dentro de ellos se destaca, por su particular relevancia para el tema que nos convoca, el *“Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia”*, proferido el 13 de diciembre de 2004.

Como comprobaremos a continuación, desde la concepción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005, no ha sido, ni será aplicable, ni podrá cumplir con los postulados de verdad, justicia y reparación.

a. Sobre el derecho a la verdad: la Comisión reiteró que el derecho a la verdad no debe ser coartado a través de medidas legislativas o de otro carácter. Agregó que este derecho implica que el diseño del proceso destinado a establecer la verdad prevea el libre ejercicio del derecho a buscar y recibir información, y a su vez habilite al poder judicial a emprender y completar las investigaciones correspondientes.

b. Sobre el derecho a la Justicia: el informe de la Comisión sostuvo con particular énfasis que cada vez se produjeran crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y/o violaciones a los derechos humanos a través de la comisión, entre otros,

de asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, traslados o desplazamientos forzosos, torturas, actos inhumanos destinados a causar intencionalmente la muerte o graves daños a la integridad física y mental de las personas, ataques contra la población civil o sus bienes o reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años de edad, los Estados tenían —conforme al derecho internacional consuetudinario y los tratados— la obligación perentoria de investigar los hechos y juzgar y sancionar a los responsables. Agregó que conforme al Derecho internacional, esta clase de crímenes tenían un carácter imprescriptible, no eran susceptibles de amnistía, y si no eran esclarecidos por el Estado podía generar la responsabilidad internacional del Estado y *“habilitar la jurisdicción universal a fin de establecer la responsabilidad penal individual de los implicados”*.

La impunidad en Colombia respecto estos crímenes es total. La Fiscalía ha reportado la desaparición forzada de aproximadamente 30.0000 personas, de las cuales no se ha abierto ningún proceso judicial. En la mayoría de los casos en los cuales se ha identificado a los autores intelectuales de los crímenes, las autoridades no actúan oportunamente, o no actúan. Es evidente para el conocimiento público, nacional e internacional, que no obstante que los paramilitares desmovilizados sindicaron como autores intelectuales a personas y entidades públicas y privadas, éstas no son objeto de actuación judicial; así mismo con los miembros de la fuerza pública que fueron señalados en reiteradas audiencias públicas por los paramilitares desmovilizados.

c. Sobre el derecho a la reparación: la Comisión reiteró que las víctimas tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, que debe materializarse a través de medidas individuales de restitución, indemnización y rehabilitación, medidas de satisfacción de alcance colectivo y víctimas de los crímenes cometidos durante el conflicto armado tienen derecho garantías de no repetición, todas en conjunto destinadas a restablecer su situación, sin discriminación.

3.5. Procedimiento establecido en la Ley 975 de 2005

Respecto al procedimiento, es preciso partir de la normatividad vigente al momento de la ocurrencia de los hechos delictivos y al respecto la Honorable Corte Suprema de Justicia, en el Auto del 26 de octubre de 2007, lo mencionó y lo explicó de la siguiente forma:

3. La ley “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley”, como ocurre con todos los estatutos especiales, contiene una disposición de “complementariedad” o remisión normativa de acuerdo con la cual “para todo lo no dispuesto (en ella)... se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal (artículo 62).

4. La citada remisión al “Código de Procedimiento Penal” resulta confusa pues para la fecha de expedición de la Ley 975 de 2005, en el territorio nacional estaban vigentes dos estatutos procesales diferentes, el más antiguo con tendencia mixta (Ley 600 de 2000) y el más reciente

acorde con la sistemática acusatoria (Ley 906 de 2004), situación que impone la tarea de dilucidar cuál de dichos códigos es al que se hace referencia en el artículo citado.

5. Para cumplir tal cometido primero hay que advertir que la mayoría de delitos atribuibles a los desmovilizados pertenecientes a los grupos paramilitares ocurrieron en vigencia de la Ley 600 de 2000, y en los precisos términos del artículo 533 de la Ley 906 de 2004, la nueva normatividad solamente será aplicable a los delitos cometidos por los miembros de tal organización ilegal de acuerdo con las reglas de gradualidad, de donde se sigue que inicialmente la remisión se debe hacer al estatuto procesal de 2000, pero por la filosofía y acato que se debe tener respecto del Acto Legislativo 03 de 2002, unido a la similitud de algunas instituciones de la nueva codificación procesal de 2004 con las consagradas en la ley de transición, también resulta imperativo examinar las nuevas instituciones.

6. Además de lo anterior no se debe desconocer que en situaciones de sucesión o coexistencia de leyes ha de ser tenido en cuenta el principio de favorabilidad.

7. En estas condiciones, si se trata de un asunto ocurrido en época anterior al 1° de enero de 2005, la regla general para efectos de la remisión normativa será la de acudir a la Ley 600 de 2000, salvo que se trate de instituciones que solamente pueden tener **identidad** con las consagradas en la Ley 906 de 2004, caso en el cual la integración normativa se debe hacer con el estatuto procesal de estirpe acusatoria. (Corte Suprema de Justicia. Auto del 26 de octubre de 2007).

3.6. Etapas del juzgamiento

Según la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005, para el juzgamiento de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley deberán surtirse las siguientes nueve (9) etapas:

3.6.1. Primera etapa: Es preciso determinar el estado en que se encuentra el desmovilizado, si individual o colectivamente.

3.6.1.1. Desmovilización Individual.

3.6.1.2. Desmovilización Colectiva.

3.6.1.3. Desmovilización de persona privada de la libertad.

3.6.2. Segunda etapa: La Fiscalía investigará si los desmovilizados tienen antecedentes penales vigentes.

3.6.3. Tercera etapa: La Versión Libre. El Gobierno Nacional enviará el listado de los miembros del grupo armado al margen de la ley, que se hayan desmovilizado y de las personas que individualmente decidan acogerse a esta ley, realizando la respectiva carta de sometimiento a la misma y que suscriban el acta de compromiso.

La Fiscalía, de acuerdo a lo previsto en el decreto 4760 de 2005, debería adelantar la investigación tendiente a buscar la verdad material, a través de la Versión Libre, buscar el origen del respectivo bloque, establecer la zona donde operaba el mismo, el modo de operar, cuáles eran los ingresos económicos que sostenían al grupo, quienes contribuían con la financiación, su intervención política, posibles masacres, las diversas limpiezas sociales que realizaban, esclarecer las conductas punibles e identificar los posibles bienes.

La versión libre fue reglamentada por el Decreto 3391 de 2006, en donde se insiste que el postulado está obligado a hacer una confesión completa, detallada y cierta de todas las conductas punibles en las que hizo parte o de las que sepa que el grupo cometió, así como informar “las causas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su participación en los mismos o de los hechos de que tenga constancia, a fin de asegurar el derecho a la verdad”.

¿Cómo es la participación de las víctimas en esta etapa? Alejandro Aponte Cardona En: El proceso penal especial de Justicia y Paz: Alcances y límites de un proceso penal concebido en clave transicional, CITpax, Madrid-Bogotá, 2011, p. 128, se pronunció de la siguiente manera:

“Con relación a la versión libre dos aspectos centrales han sido objeto de debate, a saber: (i) la posibilidad de que las víctimas interroguen directamente a los desmovilizados durante la versión libre; y (ii) los requisitos y condiciones para asistir a estas diligencias”.

En el primer aspecto no ha sido posible que las víctimas puedan preguntar directamente a los postulados, ya que las versiones se realizan en salones cerrados donde no se permite ni que las víctimas ni sus representantes puedan estar presentes, entonces es preciso hacer las preguntas por escrito para que en una eventualidad se le haga la respectiva pregunta y lo que sucede con mayor frecuencia es que no se sabe si

se hizo o no la misma. En lo que hace referencia al segundo punto, es que ciertamente la fiscalía invita a las víctimas ha que se acerquen a las diligencias, pero no pasa de un mecanismo meramente formal ya que hay que ver que las víctimas se encuentran en su gran mayoría retiradas de las ciudades principales y ello no les es posible asistir, pero cuando logran acercarse se encuentran con infinidad de obstáculos que evitan la realización de las diligencias, entre ellos, puedo nombrar los siguientes: falencias tecnológicas, renuencia a asistir por los postulados, falta de disponibilidad de salas, etc.,... Adicionalmente la mayoría de las versiones han sido eternas, es decir, no hay un programa metodológico para la realización de ellas, y esto se ha convertido en unas versiones que llevan años y no han permitido que el proceso avance.

3.6.4. Cuarta etapa: Ante el Juez de Control de Garantías: Audiencia Preliminar de Formulación de la Imputación.

La cual es sencillamente un acto formal de comunicación de que se investigan determinadas conductas punibles a un postulado o versionado. En ella, el fiscal competente solicitará al magistrado de control de garantías, que se realice esta audiencia dentro de un plazo de treinta y seis (36) horas, contadas a partir de la versión libre y que se haya desarrollado el plan metodológico, en esta etapa procesal el fiscal realiza la imputación de cargos, se solicita la detención preventiva y la adopción de medidas cautelares sobre bienes.

3.6.5. Quinta etapa: Audiencia de Formulación de Cargos.

Regulada en el artículo 19 de la ley 975 de 2005. En esta instancia procesal pueden ocurrir dos situaciones:

a) Que el desmovilizado no acepte los cargos: En tal eventualidad, no se podrá dar aplicación a la ley 975 de 2005 y el proceso se remitirá a la jurisdicción ordinaria de acuerdo a la legislación penal vigente. (Ley 975 de 2005. Parágrafo 1 del artículo 19).

Si lo que sucede es que realiza aceptación parcial, respecto de los delitos aceptados se le otorgarán los respectivos beneficios que consagra esta ley. (Ley 975 de 2005. Artículo 21). Frente a los punibles no aceptados se rompe la unidad procesal y se remite a la justicia ordinaria.

b) Si el desmovilizado acepta cargos, se aplica la ley de Justicia y Paz y se envían todas las actuaciones procesales a la secretaría de la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar para que asuma el conocimiento. (Ley 975 de 2005. Inciso 2 del Artículo 19).

Otras Audiencias Preliminares

Según el trabajo desarrollado por el doctor BALTAZAR GARZON, respecto de la justicia Transicional en Colombia año 2011: “El artículo 13 de la Ley 975 de 2005, contempla la posibilidad de realizar audiencias preliminares, distintas a las anteriormente referidas, que atienden a propósitos propios dentro del esquema general del proceso penal especial de Justicia y Paz”.

Algunas de las audiencias en alusión, son aquellas donde se tramita (i) la práctica de una prueba anticipada que por motivos fundados y de extrema necesidad se requiera para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio, (ii) la adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos, (iii) la solicitud y la decisión de imponer medida de aseguramiento y (iv) la solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares sobre bienes. Ahora bien, por su importancia práctica, a continuación se hará referencia a las últimas dos audiencias preliminares reseñadas, con el propósito de establecer algunas dificultades prácticas suscitadas en las mismas.

Audiencia de Solicitud y Decisión de Medida de Aseguramiento

El numeral 3 del artículo 13 de la Ley 975 de 2005, establece que la solicitud y la decisión de imponer medida de aseguramiento, se realiza a través de una audiencia

preliminar. No obstante, valga aclarar que la solicitud de esta medida puede darse en el marco de la audiencia de formulación de imputación o en audiencia separada.

Ahora bien, para que pueda proceder la solicitud de medida de aseguramiento, es necesario que aquella responda a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado N. 30942, 9 de febrero de 2009, M.P: María del Rosario González de Lemos. Ha señalado que no podría imponerse medida de aseguramiento, de configurarse las siguientes hipótesis: (i) la decisión carece totalmente de motivación, al omitirse las razones de orden fáctico y jurídico que sustenten la decisión; (ii) la fundamentación es incompleta, esto es, el análisis que contiene es deficiente, hasta el punto de que no permite su determinación; (iii) la argumentación que contiene es ambivalente, lo que quiere decir que esté sustentada en argumentaciones contradictorias o excluyentes, las cuales impiden conocer su verdadero sentido; o (iv) la motivación es aparente.

Medidas Cautelares Personales

La Sala de Casación Penal, en auto del 9 de diciembre de 2010, estimó como necesaria la medida de aseguramiento para cada delito imputado, puesto que cada víctima debería saber que el desmovilizado está privado de la libertad por los actos delictivos que se cometieron contra ella. Además, de no imponerse la detención preventiva por cada delito imputado podría suceder que al modificarse la prueba en

relación con la imputación inicial, se abra el espacio para una eventual revocatoria de la medida de aseguramiento, lo cual supondría una afrenta a los derechos de las víctimas. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado N. 36015, 27 de abril de 2011, M.P: Fernando Alberto Castro).

Medidas sobre Bienes Reales

En el artículo 13 de la Ley 975 de 2005, la audiencia de imposición y decisión de medidas cautelares sobre bienes está contemplada como audiencia preliminar. Reviste especial relevancia dentro del proceso de Justicia y Paz en razón a que da la posibilidad de establecer medidas cautelares sobre bienes, garantizando el derecho a la reparación de las víctimas.

3.6.6. Sexta etapa: Ante el Tribunal Superior de Justicia y Paz: Audiencia de Control de Legalidad de la Aceptación de Cargos.

Después de recibida la aceptación, la sala convocará a audiencia pública en un plazo de diez (10) días, en esta audiencia se determinarán dos aspectos:

a) Establecer si la aceptación de cargos se realizó de forma libre, voluntaria, espontánea y asistida por un defensor.

b) Una vez realizado el paso anterior se abre el incidente de reparación integral, que deberá ser solicitado por la víctima, del fiscal del caso o del Ministerio Público. El magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes. (Ley 975 de 2005. Artículo 23).

3.6.7. Séptima etapa: Audiencia Pública. Incidente de Reparación (Ley 975 de 2005. Artículo 23).

En esta audiencia interviene la víctima quien podrá actuar a nombre propio o a través de su representante legal, para que le ayude a formular su petición, manifestando en forma concreta la forma cómo desea la reparación y señale las pruebas que fundamenten su pretensión.

Posteriormente se pondrá en conocimiento del imputado o postulado para determinar la posibilidad de una conciliación y si esto procede se incorpora dentro de la decisión que falla este incidente. Pero en el evento que no haya acuerdo la Sala deberá practicar las pruebas ofrecidas por las partes, escuchar sus pretensiones y fallar el incidente en la misma audiencia.

Lo anterior es lo que señala la teoría jurídica del proceso y de la ley de justicia y paz, pero aunque no se ha llegado todavía a incidentes de reparación, sino en

contadas excepciones, la praxis indica que es en esta instancia donde las víctimas van a tener mayores dificultades y tropiezos a cuenta del mismo proceso.

Llegada a esta instancia, la víctima y su representante legal se encuentran con la muralla de la carga probatoria. Lo primero que debe hacer es probar que es víctima indirecta mediante un acerbo probatorio documental: presentar registros auténticos de nacimiento, de matrimonio, de acreditación de parentesco, para probar que es la viuda, la madre, la hermana, el hijo de la víctima directa, como si llegar registrada y reconocida como víctima indirecta por la Fiscalía General de la Nación no fuera suficiente.

Además de ello tiene que probar mediante certificados auténticos de nacimiento, defunción, desaparición, desplazamiento, de lesiones, de pérdidas de bienes materiales, certificados laborales y de ingresos, de su víctima directa, que la persona si es su familiar y víctima directa, como si el reconocimiento o aceptación del homicidio o desaparición o desplazamiento por parte del postulado no fuera prueba suficiente del hecho, del daño y del nexo causal, lo cual busca por parte del Estado ir eliminando progresivamente a las víctimas reclamantes en esta instancia, sacarlas del proceso para no reconocerles ninguna indemnización ni reparación, sino buscando la impunidad para el paramilitar y la burla de los derechos de las víctimas.

La prueba sin obstáculos del hecho, del nexo causal y del daño debe limitarse, como se dijo atrás, a la aceptación por parte del postulado; aparte de ello, los familiares

reclamantes pueden ser reconocidos como tales con el simple registro y reconocimiento de su calidad de víctimas indirectas por la Fiscalía General de la Nación: lo demás son –repito- obstáculos probatorios en contra de las víctimas, encaminados a no indemnizarlas ni repararlas.

A la fecha se han llevado a cabo siete audiencias de incidentes de reparación integral en el marco de Justicia y Paz; El primer incidente fue el 13 de agosto de 2008, y el postulado, Wilson Salazar alias “El Loro”. El segundo, en el proceso de los postulados Edward Cobos Téllez y Uber Enrique Banquéz, se realizó el 26 de abril de 2010, de la masacre en Rosas de Mampuján y San Cayetano en el departamento de Bolívar. El tercero, en el proceso de Iván Laverde alias “El Iguano” empezó el 7 de julio de 2010, el cuarto se realizó los días 24 y 29 de junio del 2011 en el proceso de Aramis Machado ante la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá. El quinto, el sexto del Bloque Norte, Frente José Pablo Díaz, Édgar Ignacio Fierro, conocido con el alias de ‘Don Antonio’. El 3 de octubre de 2011. El séptimo bloque Vencedores de Arauca en el mes de octubre de los corrientes.

3.6.8. Octava etapa: Audiencia Pública de Sentencia: (Decreto 4760 de 2005, Artículo 8).

De acuerdo con el artículo 19 de la ley 975 de 2005, en un plazo de diez (10) días siguientes a la audiencia preliminar de verificación, se dará trámite a la audiencia de sentencia e individualización de pena.

La pena alternativa, establece que previo el cumplimiento de los art. 10 y 11 de la ley 975 de 2005, ésta deberá ser de cinco (5) a ocho (8) años de privación de la libertad, teniendo en cuenta la colaboración del desmovilizado con la Justicia y la gravedad de los delitos cometidos. Adicionalmente, el imputado deberá comprometerse a cumplir con las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y se decretará la extinción de dominio de los bienes que se destinarán a la reparación y la resocialización.

3.6.9. Novena etapa: Recursos. (Ley 975 de 2005. Artículo 26). Si no se apela la sentencia queda en firme y se termina el procedimiento.

REPOSICIÓN: Pero si por el contrario se interpone éste recurso, que procede para todas las decisiones, se sustentará y resolverá oralmente y se resolverá en la misma audiencia.

APELACIÓN: Es procedente contra las sentencias y los autos que resuelven asuntos de fondo; el momento procesal es en la misma audiencia en la que se transmite la decisión y se concede el efecto suspensivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado ponente en un término de diez (10) días citará a las partes e intervinientes para que realicen la argumentación oral del mismo, posteriormente la Sala podrá decretar un receso no superior a dos (2) horas para dictar el fallo.

Contra esta decisión no procede el recurso de Casación, pero sí la acción extraordinaria de Revisión, de acuerdo a la normatividad penal vigente. (Ley 975 de 2005. Parágrafos 2 y 3 del artículo 26).

La realidad y práctica de este procedimiento especial está por verse, pues lo que se desarrolló hasta ahora indica que se han llevado a cabo las audiencias de versiones libres en muy pocos casos completos; se han realizado audiencias de formulación de imputación en la mayoría de los casos parciales; audiencias también parciales de formulación de cargos y algunas audiencias de legalización de cargos igualmente parciales, de modo que todavía en el terreno de la praxis se desconoce cómo se llevarán a cabo los incidentes de reparación integral, las sentencias y especialmente su cumplimiento.

La primera sentencia que se ha proferido dentro de la ley de justicia y paz, ha sido la del desmovilizado Wilson Salazar Carrascal, alias “El loro”, la cual fue apelada por los representantes de las víctimas 2 de junio de 2009 y en la cual, en fallo de segunda instancia, calendado el 31 de julio de 2010 bajo radicado N° 31539, del Honorable Magistrado Augusto Ibañez Guzmán, se declaró la nulidad de la actuación

surtida a partir del acto de formulación de cargos inclusive, lo que significa que el citado proceso debe regresar a esta instancia para realizarla no en forma parcial sino completa, porque absurdo resulta adelantar audiencias parciales e incidentes de reparación parciales esperando obviamente fallos parciales.

Otra sentencia se dio el 27 de abril de 2011, contra de Edward Cobos Téllez alias “Diego Vecino” y Úber Bánquez Martínez alias “Juancho Dique”. Se los condenó a penas ordinarias de 39 y 38 años respectivamente por la masacre de 11 campesinos y 1081 víctimas directas de desplazamiento forzado en Mampuján el 10 y 11 de marzo de 2001 (Sentencia Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Radicado N. 110016000253200680077. M P: Uldi Teresa Jiménez López). Y como pena alternativa se les condenó a 8 años de prisión.

En cuanto se refiere a la reparación individual estableció el monto de 40 millones COP por persona por homicidio con un tope de 240 millones por núcleo familiar, descontando la reparación administrativa si se había otorgado con anterioridad, y 17 millones por desplazamiento, con un máximo de 120 millones por núcleo familiar. Es importante resaltar que el Tribunal se encontró más preocupado por el costo económico de la ley de justicia y paz, que se ocupo de esta situación hablando de la situación económica del Estado y la imposibilidad de un pago, para lo cual determino que la indemnización debía hacerse en equidad, adicionalmente ordeno la creación una subunidad en la Fiscalía General de la Nación para perseguir los bienes lícitos e ilícitos de los postulados, incluso las cuentas en el extranjero, propuso realizar la extinción de

dominio a los bienes de los políticos condenados por concierto para delinquir, Identificar bienes y perseguir los que estén en poder o posesión de los herederos de desmovilizados muertos, y crear un impuesto especial para las empresas que colaboraron y se beneficiaron del paramilitarismo.

Otra sentencia es la de Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano” del 2 de diciembre de 2010.

La cuarta sentencia es la de Aramis Machado alias “Cabo Machado” del 29 de junio de 2011.

La Quinta sentencia es la Andrés Mauricio Torres León “Jesucristo”, del Bloque Norte de las Autodefensas, que se llevo a cabo en el mes de agosto de 2011.

La sexta sentencia es la de Edgar Ignacio Fierro Flórez “Don Antonio”, del Bloque Norte de las Autodefensas, que se llevo a cabo el día 3 de octubre de 2011.

La séptima sentencia es la de Freddy Rendón Herrera “El Alemán” del Bloque Elmer Cárdenas, la cual comenzó el día 8 de noviembre de 2011.

Por simple lógica jurídica todas las diligencias de imputación y formulación de cargos deben ser completas, del mismo modo que todos los incidentes de reparación,

no pudiendo proferirse sentencias parciales, dándose que en la actualidad el proceso de justicia y paz prosigue en sus etapas iniciales.

Dada la complejidad cuantitativa y cualitativa del proceso, donde no hay uno o dos sino miles y miles de postulados que aceptan cada uno no docenas ni cientos sino miles y miles de víctimas, el desarrollo y culminación satisfactorio de estas instancias (versiones, imputaciones, formulaciones, legalizaciones, incidentes, sentencias, apelaciones, segundas instancias) tardara varios años antes de ver los primeros resultados.

3.7. Organismos creados para la implementación de la Ley de Justicia y Paz

Para la implementación de la Ley de Justicia y Paz se crearon los siguientes organismos: la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación; Tribunales Superiores de Distrito Judicial para la Justicia y la Paz; la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz; la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes; y el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Así mismo, organismos especializados como el Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (Ley 782 de 2002, modificada por la Ley 1106 de 2006).

CAPÍTULO IV

LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, LAS DEFINICIONES DE LA ONU Y LOS INFORMES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

4.1. El “Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, proclamados por la ONU en 1998

El “Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, proclamados por la Comisión de Derechos Humanos ONU en 1998, encuentra su principal antecedente histórico en el *“Informe Final del Relator Especial sobre la impunidad y conjunto de principios para la protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”*. Este último documento, que data de 1992, fue la respuesta al encargo hecho a Louis Joinet en 1991 por la Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección de las minorías de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (hoy en día Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos), de sistematizar los principios básicos del Derecho Internacional en materia de derechos de las víctimas consideradas como sujetos de derecho. Conforme a dicho Informe, en adelante llamado “Informe Joinet”, a las víctimas les asisten los siguientes derechos:

- a) El derecho a saber de la víctima;
- b) El derecho de la víctima a la justicia, y
- c) El derecho a la reparación de la víctima.

4.2. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 22 de noviembre de 2000² (Reparaciones)

En este pronunciamiento la Corte Interamericana se refirió de manera particular al derecho a la verdad, señalando que implica que las víctimas conozcan lo que sucedió y quiénes fueron los responsables de los hechos. Consideró que el conocimiento de la verdad forma parte del derecho a la reparación. En caso de homicidio, la posibilidad de los familiares de la víctima de conocer dónde se encuentran sus restos³, constituye un medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo. El derecho a la verdad, además, fue entendido como un derecho a la sociedad y no solo de las víctimas:

73. De conformidad con el punto resolutivo octavo de la sentencia sobre el fondo dictada el 25 de noviembre de 2000, Guatemala debe realizar “una investigación para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en [esa] Sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables”⁴. De esta manera, dentro de las reparaciones que debe efectuar el Estado se encuentra necesariamente la de investigar

² Caso *Bámaca Velásquez vs Guatemala*. Los hechos que dieron lugar a este proceso consistieron en el apresamiento del líder guerrillero Efraín Bámaca por el ejército guatemalteco. Estando detenido fue torturado a fin de que revelara información. Y luego fue desaparecido, sin que hasta el momento de la sentencia se tuviera información sobre su paradero.

³ Cfr. Caso *Castillo Páez*, Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 90; Caso *Caballero Delgado y Santana. Reparaciones* (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 31, párr. 58; y Caso *Neira Alegría y Otros, Reparaciones*, *supra* nota 38, párr. 69.

⁴ Caso *Bámaca Velásquez*, *supra* nota 6, resolutive octavo.

efectivamente los hechos, sancionar a todos los responsables y divulgar la resultados de la investigación.

74. Este Tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a los familiares de las víctimas de conocer lo que sucedió⁵ y saber quiénes fueron los agentes del Estado responsables de los respectivos hechos⁶. “[L]a investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, [...] es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad”⁷. Además, este Tribunal ha indicado que el Estado “tiene la obligación de combatir [la impunidad] por todos los medios legales disponibles ya que [ésta] propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”⁸. El Estado que dejara impune las violaciones de derechos humanos estaría incumpliendo, adicionalmente, su deber general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción⁹.

⁵ Cfr. Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 100; Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 200; y Caso Aloeboetoe y Otros, Reparaciones, supra nota 40, párr. 109.

⁶ Cfr. Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, supra nota 5, párr. 69; y Caso Paniagua Morales y otros, supra nota 5, párr. 200.

⁷ Cfr. Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, supra nota 5, párr. 69; Caso Cesti Hurtado, Reparaciones, supra nota 5, párr. 62; Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 100; y Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 200.

⁸ Cfr. Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, supra nota 5, párr. 69; Caso Cesti Hurtado, Reparaciones, supra nota 5, párr. 63; Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 100; y Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 201.

⁹ Cfr. Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, supra nota 5, párr. 69; Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 99; Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 199; y Caso Bámaca Velásquez, supra nota 6, párr. 129.

4.3. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2004¹⁰

En este pronunciamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se referentes a prescripción o cualquier otra circunstancia conducente a impedir la investigación y sanción de los responsables de la violación de derechos humanos, al deber del Estado de investigar oficiosamente los actos de tortura y a impedir la repetición de las violaciones de esta clase de derechos mediante la adopción de medidas para garantizar la investigación y sanción efectiva.

A pesar de haberse llevado a cabo un proceso judicial a nivel interno, en el cual se identificó a un presunto autor intelectual de los hechos, hasta la fecha de emisión de la presente Sentencia, más de trece años después de ocurridos éstos, el mismo no ha sido sancionado como responsable, a pesar de que continúa presentando escritos a través de su apoderado en la causa que se encuentra abierta al respecto, ni se ha investigado la posible existencia de más autores o responsables.

Se trae a colación esta sentencia, en razón que en Colombia, en la mayoría de los casos en los cuales se ha identificado a los autores intelectuales de los crímenes, las autoridades no actúan oportunamente, o no actúan. Es evidente para el

¹⁰ Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. En esta oportunidad, los hechos que dieron lugar al proceso consistieron en la captura, tortura y ejecución de los hermanos Emilio y Rafael Gómez Paquiyauri de 14 y 17 años respectivamente, por agentes de la Policía Peruana. El tribunal del Callao dictó sentencia condenatoria contra los autores materiales del delito, dos años después de los hechos. Sin embargo, transcurridos más de trece años a partir del delito, los autores intelectuales permanecían sin ser juzgados ni sancionados.

conocimiento público, nacional e internacional, que no obstante que los paramilitares desmovilizados sindicaron como autores intelectuales a personas y entidades públicas y privadas, éstas no son objeto de actuación judicial.

Todo lo anterior ha configurado una situación de grave impunidad. Sobre la impunidad la Corte Interamericana plantea lo siguiente:

La falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares¹¹.

¹¹ Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros), supra nota 99, párr. 173; cfr. Caso Maritza Urrutia, supra nota 5, párr. 126; Caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párrs. 156 y 210; Caso Bulacio, supra nota 6, párr. 120; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 15, párrs. 143 y 185; Caso Las Palmeras. Reparaciones, supra nota 17, párr. 53.a); Caso del Caracazo. Reparaciones, supra nota 17, párrs. 116 y 117; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 101; Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 64; Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 56; Caso Cantoral Benavides. Reparaciones, supra nota 108, párr. 69; Caso Cesti Hurtado. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 31 de mayo de 2001. Serie C No. 78, párr. 63; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 100; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 201; Caso Ivcher Bronstein, supra nota 19, párr. 186; Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 68, párr. 123; Caso Bámaca Velásquez, supra nota 68, párr. 211; Caso Blake. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, párr. 64; Caso Castillo Páez. Reparaciones, supra nota 101, párr. 107; y Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 170.

4.4. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de septiembre de 2005¹².

En este pronunciamiento la Corte Interamericana, sobre el caso de la masacre de Mapiripán, Departamento del Meta en Colombia, nuevamente precisó el alcance del derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familiares a un recurso judicial efectivo, y el deber del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. De manera especial señaló que los procesos de paz, como el que atraviesa Colombia, no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ella en materia de Derechos humanos.

Entre otras consideraciones, al respecto se explicó lo siguiente:

Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables¹³.

¹² Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Los hechos que suscitaron el caso consistieron la llegada al aeropuerto de San José de Guaviare de aproximadamente un centenar de miembros de la autodefensas Unidas de Colombia (AUC), procedentes del Urabá antioqueño. A su llegada fueron recogidos por miembros del Ejército Nacional y transportados hasta el municipio de Mapiripán en camiones de esa Institución. Durante su permanencia en Mapiripán los paramilitares secuestraron, torturaron, asesinaron y descuartizaron a 49 personas, a las que acusaban de auxiliar a la guerrilla. La Fiscalía concluyó que la masacre se había perpetrado con el apoyo y aquiescencia de la Fuerza Pública. Pese a ser informados, los comandantes del ejército se mantuvieron en completa inactividad. Transcurridos más de ocho años, la justicia penal no había logrado identificar a las víctimas, y solo había juzgado y sancionado a unas pocas personas comprometidas en la masacre.

¹³ Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 11, párr. 66; Caso 19 Comerciantes, supra nota 190, párr. 188, y Caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr. 209.

CAPÍTULO V

SÍNTESIS VALORATIVA DE LA SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL C-319 Y C-370 DE 2006 SOBRE LA LEY 975 DE 2005

5.1. Síntesis valorativa de las Sentencias de la Corte Constitucional

Las Sentencias C-319 y C-370 de 2006 de la Corte Constitucional, rectaron el proceso de divergencias con la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005.

La Corte Constitucional a través de la sentencia C-319 de 2006 declaró **EXEQUIBLE** la Ley 975 de 2005, en relación con el cargo formulado por no haberse tramitado como Ley Estatutaria. En dicho fallo se declaró improcedente un cargo de inconstitucionalidad, de carácter global, según el cual la mencionada ley debía haber sido tramitada como estatutaria y no como ordinaria, debido a que regulaba los núcleos esenciales de los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación.

La Ley de Justicia y Paz 975 de 2005 fue demandada por Gustavo Gallón y ciento cuatro (104) ciudadanos colombianos más, por inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37 (numerales 5 y 7), 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71.

La Sentencia C-370 de 2006, en su parte resolutive constituida por 37 numerales, confirió EXEQUIBILIDAD a la mayoría de los artículos demandados a través de 19 numerales. Así mismo, se INHIBIO para otros artículos demandados a

través de 9 numerales; declarando INEXEQUIBLES algunos artículos demandados, a través de 8 numerales meramente.

5.2. Síntesis valorativa de la Parte Resolutiva de la Sentencia C-370 de 2006

5.2.1. En el punto resolutivo primero de la Sentencia C-370 de 2006, la Corte define ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-319 de 2006, ratificando la **EXEQUIBILIDAD** de la Ley 975 de 2005, en relación con el cargo formulado por no haberse tramitado como ley estatutaria.

5.2.2. En 19 puntos resolutivos de la Sentencia C-370 de 2006, la Corte confiere **EXEQUIBILIDAD a la mayoría de los artículos demandados**, caracterizados por tocar los temas fundamentales de la demanda, siendo los más significativos los siguientes:

En el punto resolutivo segundo, respecto a los cargos formulados según los cuales la Ley 975 de 2005 debería haber sido expedida con sujeción a los trámites propios de una ley de concesión de amnistía o indulto general (**Exequible**).

En el punto resolutivo cuarto, respecto a los cargos formulados al artículo 3º de la ley 975 de 2005, en el entendido de que la colaboración con la justicia debe estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición (**Exequible**).

En el punto resolutivo quinto, respecto a los cargos formulados a los incisos segundo y quinto del artículo 5º de la Ley 975 de 2005, en el entendido que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley **(Exequible)**.

En el punto resolutivo décimo, respecto a los cargos formulados al artículo 17 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que la versión libre debe ser completa y veraz **(Exequible)**.

En el punto resolutivo trigésimo primero, respecto a los cargos formulados al inciso segundo del artículo 54 de la Ley 975, en el entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron **(Exequible)**.

5.2.3. En 8 puntos resolutivos de la Sentencia C-370 de 2006, la Corte confiere **INEXEQUIBILIDAD a la minoría de los artículos demandados**, casi todos se caracterizan por cambiar expresiones del texto; Los temas importantes de la demanda caracterizados de inexecutable los trató en los siguientes puntos resolutivos:

El punto resolutivo décimo noveno, respecto a los cargos formulados al artículo 25 de la Ley 975 de 2005, declara EXEQUIBLE el artículo, salvo el inciso segundo y el siguiente apartado del inciso primero: *“sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley”*, que se declaran **INEXEQUIBLES**.

El punto resolutivo trigésimo sexto, respecto a los cargos formulados al artículo 70 de la Ley 975 de 2005, referido a la rebaja de penas, por vicios de procedimiento en su formación **(Inexequible)**.

El punto resolutivo trigésimo séptimo, respecto a los cargos formulados al artículo 71 de la Ley 975 de 2005, referido al indulto, por vicios de procedimiento en su formación **(Inexequible)**.

5.2.4. En 9 puntos resolutivos de la Sentencia C-370 de 2006, la Corte se declara **INHIBIDA** para pronunciarse sobre los artículos 21, 22 y 23, 27,28, 62, 69, refiriéndose para los demás meramente sobre incisos y expresiones de la Ley 975 de 2005.

5.3. EXAMEN DE LOS CARGOS DE CONSTITUCIONALIDAD FORMULADOS CONTRA LAS NORMAS DEMANDADAS

5.3.1. Inhibición respecto de algunos de los cargos planteados

La Corte advierte que algunas de las censuras propuestas en la demanda no cumplen con los requisitos establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación para la construcción de cargos de inconstitucionalidad, por lo que deberá inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo sobre estas materias. Para resolver esta controversia la Corte adoptará la siguiente metodología. En primer lugar, sintetizará los aspectos centrales de la doctrina sobre las condiciones exigibles a los cargos de inconstitucionalidad. Luego, identificará los cargos que incumplen con los mencionados requisitos y los agrupará a partir de sus aspectos temáticos comunes. Finalmente, establecerá los argumentos que llevan a concluir la ineptitud de la demanda respecto de estas censuras.

5.3.2. Requisitos de los argumentos que sustentan los cargos de inconstitucionalidad.

La jurisprudencia constitucional¹⁴ ha establecido, de forma reiterada y uniforme, que las razones que sustentan los cargos de inconstitucionalidad deben cumplir con determinados requisitos, que permitan el cumplimiento de las finalidades de la acción pública en tanto ejercicio democrático a través del cual los ciudadanos concurren ante al Tribunal Constitucional en defensa de las disposiciones de la Carta Política.

¹⁴ La síntesis comprehensiva de este precedente se encuentra en la sentencia C-1052/01, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Desde esta perspectiva, este Tribunal ha considerado que la construcción de un cargo de inconstitucionalidad debe cumplir con las condiciones de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.

La claridad de un cargo se predica cuando la demanda contiene una coherencia argumentativa tal que permite a la Corte identificar con nitidez el contenido de la censura y su justificación.

La certeza de los argumentos de inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se dirijan contra una proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada. Es decir que se cuestione un contenido legal verificable a partir de la interpretación del texto acusado.

La especificidad resulta acreditada cuando la demanda contiene al menos un cargo concreto, de naturaleza constitucional, en contra de las normas que se advierten contrarias a la Carta Política. Este requisito refiere, en estas condiciones, a que los argumentos expuestos por el demandante sean precisos, ello en el entendido que *“el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisibles que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se*

acusar. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.

Las razones que sustentan el concepto de la violación son **pertinentes** en tanto estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es, fundados *“en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado.”*

La condición de **suficiencia** ha sido definida por la jurisprudencia como la necesidad que las razones de inconstitucionalidad guarden relación *“en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (...) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.”*

5.3.3. Inhibición respecto del cargo por violación del derecho a la justicia por “la investigación restringida de hechos por ser la ley 975 de 2005 residual al decreto 128 de 2003”

Los demandantes consideran que algunas disposiciones de los artículos 2, 9, 10, 18, 62 y 69 de la Ley 975/05 resultan contrarios a la Constitución, pues presuponen que la aplicación del procedimiento previsto en esta norma sólo sería aplicable a aquellos combatientes desmovilizados que no puedan acceder a los beneficios contenidos en el Decreto 128/03, reglamentario de la Ley 782/02, circunstancia que ocasionaría, en últimas, que todos los combatientes desmovilizados que no tengan al momento de la desmovilización procesos o condenas judiciales en contra por delitos graves, no sean sujetos de investigación judicial, a pesar que hayan cometido esta clase de conductas. Por lo tanto, los actores estiman que en aras de que las normas acusadas no sirvan de sustento para un “instrumento de impunidad”, resulta imprescindible que tanto uno como otro grupo de combatientes desmovilizados sean sometidos al procedimiento fijado por la Ley 975/05.

La Corte advierte que el cargo propuesto incumple con los requisitos de certeza y pertinencia antes analizados. En relación con el primer aspecto, es claro que la censura expuesta se dirige no sólo en contra de los artículos acusados, sino también respecto de la aplicación de otras disposiciones, contenidas en la Ley 782/02 y su Decreto reglamentario 128/03, normas que no fueron objeto de demanda en esta oportunidad. Por ende, no es posible que la Corte se pronuncie de fondo sobre el

cargo en mención, habida cuenta que los actores no establecieron la proposición jurídica completa¹⁵ necesaria para pronunciarse de fondo sobre la materia.

5.3.4. Inhibición respecto de algunas expresiones de los artículos 10 y 16 de la Ley 975/05.

La demanda presenta un cargo complejo en contra de varias disposiciones de la Ley 975/05, entre ellas las expresiones *“siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación”* contenida en el inciso primero del artículo 10 de la Ley 975/06 y *“el, o los nombres de”* prevista en el inciso primero del artículo 16 de la misma norma. Para los actores, el grupo de disposiciones acusadas hacen parte de un complejo jurídico que *“como sistema es un indulto velado y una amnistía encubierta.”*

Con el fin de apoyar la anterior conclusión, los demandantes realizan una exposición general sobre el contenido, alcance, condiciones y limitaciones de las leyes que consagran amnistías e indultos. Igualmente, manifiestan las razones jurídicas que, a su juicio, determinan la incompatibilidad de la aplicación de estas figuras para el caso de delitos que constituyan graves infracciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Respecto del cargo de inconstitucionalidad propuesto, la Corte encuentra que impide un pronunciamiento de fondo, puesto que incumple con los requisitos de certeza y especificidad. El primero, en tanto la censura propuesta no expone argumento

¹⁵ Acerca de la conformación de la proposición jurídica como parte del requisito de certeza propio de los cargos de inconstitucionalidad, *Cfr.* Corte Constitucional, sentencia C-710/96, M.P. Jorge Arango Mejía.

alguno dirigido a sostener que a partir de la interpretación de las expresiones acusadas, en sí mismas consideradas, puedan inferirse las consecuencias jurídicas que los actores predicen de ellas. El segundo, habida cuenta que las razones que pretenden adscribir implicaciones contrarias a la Constitución a los apartados demandados son de naturaleza eminentemente global, sin que sea posible determinar un cargo particular y concreto dirigido a demostrar la incompatibilidad entre los preceptos demandados y las disposiciones de la Carta Política.

5.3.5. Inhibición respecto del cargo en contra de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 62 (parcial) de la Ley 975/05, fundado en la violación del derecho a la justicia por aplicación de lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 de 2002.

La demanda considera que los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 de la Ley 975/05, en su integridad, así como el apartado “y el Código de Procedimiento Penal” contenido en el artículo 62 *ejusdem*, violan el derecho constitucional a la justicia. Ello en la medida que tales normas incorporan institutos jurídicos del sistema de enjuiciamiento penal previsto en el Acto Legislativo 03 de 2002 y que, en ese sentido, necesariamente remiten al Código de Procedimiento Penal adoptado por la Ley 906 de 2004. Por ende, las normas acusadas violan la Carta Política, pues vendrían a ser aplicadas respecto de conductas anteriores a la vigencia del Acto Legislativo mencionado. Desde esta perspectiva, los actores solicitan a esta Corporación que declare la constitucionalidad condicionada de los artículos demandados, “*bajo la interpretación de que el procedimiento allí previsto sólo es aplicable a delitos cometidos después del 1º de enero de 2005. Para el resto de efectos, tales normas son inconstitucionales.*”

La censura propuesta en los mencionados términos, a juicio de la Corte, no constituye un verdadero cargo de inconstitucionalidad, puesto que incumple con los requisitos de certeza y pertinencia que la jurisprudencia constitucional prevé para las razones que conforman el concepto de la violación. En lo referente a la primera condición, el cargo expuesto, de la misma forma como se señaló en apartado anterior, se funda en la contradicción entre la interpretación subjetiva que demandantes hacen de los preceptos acusados y las normas constitucionales que consideran violadas por las normas atacadas. En efecto, el particular entendimiento que los actores acogen de las normas acusadas les lleva a adscribirlas a la modalidad de proceso penal prevista en la Constitución luego de la promulgación del Acto Legislativo 03 de 2002. Por lo tanto, el cargo de inconstitucionalidad no va dirigido en contra del contenido concreto de las normas acusadas, sino frente a las consecuencias que los demandantes les confieren a partir de su propia comprensión. Una censura de estas características, que toma por objeto del control de constitucionalidad no al contenido normativo acusado sino a una interpretación particular del mismo, impide que la Corte emita un pronunciamiento de fondo y, por ende, deba inhibirse.

De la misma forma, el cargo estudiado incumple el requisito de pertinencia. Ello debido a que pretende edificar la contradicción de las normas acusadas con la Carta Política a partir de, como se indicó, las consecuencias jurídicas particulares y concretas que se derivan de la interpretación que hacen los actores de tales preceptos.

5.3.6. Inhibición respecto del cargo en contra del artículo 23 de la Ley 975/05, relativo a la violación del derecho a la reparación de las víctimas.

Los demandantes consideran que el artículo 23 de la Ley 975/05, que establece el procedimiento aplicable al incidente de reparación integral afecta el derecho constitucional de reparación de las víctimas. Con este fin, los actores advierten que ese trámite no es la única vía judicial para que las víctimas obtengan tal reparación, sino que a partir de lo consagrado en los artículos 42, 43 y 45 de la misma Ley, existen otros instrumentos para ese fin. De esta manera, la demanda sostiene que *“si la víctima no solicita que se abra el incidente de reparación no pierda por ello el derecho a ser reparada”*.

A juicio de la Corte, las razones expuestas no son aptas para configurar un cargo de inconstitucionalidad, amén del desconocimiento del requisito de especificidad. Nótese que los argumentos expresados por los demandantes están dirigidos a solicitar que la Corte establezca pautas interpretativas frente a algunos artículos de la Ley demandada, pero no dan cuenta de una oposición objetiva y verificable entre el artículo 23 y los preceptos constitucionales. En últimas, se está ante la ausencia de una acusación concreta frente al artículo demandado, motivo por el cual no es posible adelantar un juicio de constitucionalidad sobre el mismo.

5.4. CONSIDERACIONES SOBRE LOS CARGOS DE FONDO PROPUESTOS

La Corte analiza el tema de la paz, la justicia y los derechos de las víctimas.

5.4.1. El concepto de alternatividad penal adoptado por la Ley 975 de 2005. Estudio conjunto de los artículos 3°, 19 (parcial), 20, 24, y 29 (parcial).

El cargo básico de los demandantes se fundamenta en que esta alternatividad planteada en la ley 975 de 2005, esta violando las normas nacionales y los tratados internacionales, ya que la pena es mínima de acuerdo a las conductas punibles cometidas por los miembros de los grupos armados al margen de la ley, ya que se constituye en un sistema de impunidad.

En sentido general el legislador al referirse a la alternatividad penal, ha consagrado un beneficio que pretende suspender la ejecución de la pena establecida en la legislación penal, en donde se reemplaza la pena ordinaria por la de un mínimo de 5 años hasta 8 años y esta última es la que deberá cumplir el condenado.

La Corte Constitucional, plantea que la alternatividad penal es un beneficio que contiene una disminución en el aspecto punitivo, en donde el legislador pretende buscar la paz en el territorio nacional.

Adicionalmente la Corte en esta sentencia ha establecido que no podemos hablar de indulto, ya que esta figura jurídica de la alternatividad penal no es olvido, ni perdón, ni anula o extingue la respectiva acción penal, porque es necesario tener

presente que se requiere que durante el período de prueba y el cumplimiento de las obligaciones que ella contempla para que sea sustitutiva de la pena ordinaria.

La Corte declara inexecutable la expresión *“pero en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley”* del inciso 2° del artículo 20, en donde esta entidad a manifestado; “Este segmento elimina completamente las condenas impuestas por hechos delictivos cometidos con anterioridad a la desmovilización, puesto que condiciona la acumulación jurídica de penas a partir de la cual ha de determinarse en la sentencia la pena ordinaria cuya ejecución habrá de ser suspendida. Tal supresión total de la condena previa equivale a una afectación manifiestamente desproporcionada del derecho de las víctimas a la justicia y podría ser interpretado como un indulto disfrazado”.¹⁶

5.4.2. Análisis del cargo por violación del derecho a obtener garantías de no repetición de las conductas lesivas de los derechos de las víctimas. (Artículo 29 parcial).

Señalan Los demandantes que se deberá declarar la inconstitucionalidad de los apartes subrayados en el texto a continuación señalado:

Artículo 29. Pena alternativa:... los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia.

Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el período de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena

¹⁶ . Sentencia C-370 de 2006.

inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan.

Esta expresión comporta una desproporcionada afectación del valor justicia y del derecho de las víctimas a la no repetición, por cuanto permite la coexistencia del beneficio de reducción de pena con fenómenos de reincidencia en relación con delitos distintos a aquellos por los cuales fue condenado. Ningún aporte a la paz o a la justicia puede hacer una medida permisiva de esta naturaleza

La Corte declara la inexecutable de las expresiones “los” y “por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley” del inciso 4º del artículo 29.

La Corte respecto al punto subsiguiente declaró la constitucionalidad de la norma, teniendo en cuenta que esto se deberá analizar en cada caso puntual y no es posible hacerlo de forma general.

CAPÍTULO VI

EFFECTOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ 975 DE 2005

En el terreno del DEBER SER, ha sido positivo que el Gobierno buscara la desmovilización de los grupos paramilitares, que aunque la ley se orientó hacia la legalización de sus estructuras económicas y políticas en las regiones, también se ha registrado el desenmascaramiento de un pequeño porcentaje de los determinadores, patrocinadores y coparticipes civiles y militares. Otra cosa es que sean efectivamente judicializados.

A siete (7) años de la vigencia e implementación de la Ley de Justicia y Paz, los efectos nítidos se reflejan en el balance de ésta, de la siguiente manera:

6.1. Las estadísticas¹⁷

Desmovilizados: 35.353; Exonerados: 31.281 (88% de los desmovilizados).

Postulados: 4.511 (4.072 paramilitares y 439 guerrilleros).

Víctimas registradas: 346.057.

Hechos delictivos registrados: 292.127.

Versiones libres Iniciadas: 2.600.

Versiones libres terminadas por ausencia del postulado o por exclusión de las listas:
1.300.

Versiones libres en curso: 1.258.

Versiones libres programadas: 144.

Hechos enunciados: 57.131.

¹⁷ Balances de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Agosto de 2011

Hechos confesados: 29.416.

Postulados con imputación: 385.

Postulados con cargos: 91.

Postulados con cargos en etapa de legalización: 12.

Postulados con condenas: 4.

Postulados con sentencia debidamente ejecutoriada: 2.

Copias compulsadas a la justicia ordinaria: 9.616 casos de militares, políticos y funcionarios públicos.

6.2. El balance de la implementación de la ley de Justicia y Paz

Este balance indica claramente el fracaso en la implementación de la ley respecto a lograr los derechos fundamentales de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas, así como el fracaso del desmonte de las estructuras militares en varias regiones del país. En este sentido se observa como la no repetición por parte de estos grupos armados no se ha cumplido, ya que en los lugares donde hubo la desmovilización de los diferentes frentes, estos siguen operando con distintos nombres como “Aguilas Negras”, “Rastrojos” y otros.

En mi calidad de defensor público he comprobado que en el ejercicio de la implementación fáctica de la ley, la desprotección estatal a las víctimas del conflicto es palmaria, en donde se observa todo tipo de garantías para los postulados en sus versiones, ya que son percibidos y tratados por los funcionarios públicos como personas poderosas y respetables y no como los delincuentes que son.

Así mismo, se observa la falta de compromiso y voluntad de la Fiscalía General de la Nación – Unidad de Justicia y Paz, en trabajar conjuntamente con los apoderados de las víctimas y por lo menos facilitar los medios para acceder a las grabaciones de los videos, el ingreso a las audiencias y demás garantías para la defensa de las víctimas.

También se advierte que los postulados no están cumpliendo a cabalidad con las disposiciones de la ley a favor de las víctimas ya que la verdad que narran no es la que queremos saber todos los colombianos, sino que son versiones incompletas, contradictorias y acomodadas por cada uno de ellos.

6.3. Los interrogantes más protuberantes y las perspectivas más evidentes

6.3.1. ¿Puede una ley lograr la paz en Colombia?

Conclusión de lo antedicho es que una simple ley demagógica hecha específicamente para favorecer los intereses de un determinado sector de los actores armados del conflicto, no podrá propugnar por la paz porque no soluciona ni remotamente las causas que han originado y alimentado el conflicto a lo largo de nuestra historia.

Así mismo, como se argumentó a lo largo de la monografía, no solucionadas las causas de la violencia en Colombia, tampoco se podrá borrar por obra y gracia de su contexto la idiosincrasia de odio y venganza arraigada en el pueblo colombiano, generada en siglos de confrontaciones, por lo que esta ley no constituye el final de la historia de la violencia en Colombia, sino un capítulo más de ese siniestro libro que seguirá escribiéndose con la sangre de los colombianos de todos los bandos.

Lejos del final de la violencia en Colombia, varios años después de esta ley, lo que vendrá como consecuencia será la agudización más radical y grave del conflicto en la medida geométrica en que siguen aumentando las tres causas tantas veces aludidas en este ensayo.

La Ley 975 de 2005 no cumplirá con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

6.3.2. ¿Es suficiente saber quiénes cometieron, apoyaron, financiaron y determinaron las masacres para dar por aceptada la verdad?

6.3.3. ¿Será que se aplica justicia, con ocho años de prisión para criminales de lesa humanidad, con unas cárceles cómodas con beneficios y privilegios?

6.3.4. ¿Cuál reparación, sin verdad y sin justicia?

6.3.5. ¿Será que los pocos paramilitares que decidan pagar algunos cientos de millones de pesos a las viudas y a los huérfanos de los muertos, todo quedará reparado, perdonado y olvidado?

Al respecto recordemos cómo los desmovilizados han manifestado en múltiples versiones y audiencias del proceso de justicia y paz, que ellos carecen de bienes propios para indemnizar a sus víctimas y han señalado que corresponderá al Estado responder por esas indemnizaciones. Siendo esto así, entonces, ¿Cuánto dinero vale dar muerte a un colombiano por el delito de ser pobre?

6.3.6. ¿Será que nuestro país está preparado para aceptar una verdad a medias, una justicia parcializada y una reparación incierta?

CONCLUSIONES

1. Primera conclusión: La ley de Justicia y Paz 975 de 2005, siendo inconstitucional, fue avalada por las Sentencias de la Corte Constitucional

La ley de Justicia y Paz fue objeto de demanda por Gustavo Gallón y 104 ciudadanos más por inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37 (numerales 5 y 7), 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71.

A partir de los argumentos enarbolados por los demandantes y coincidiendo con éstos, considero que la composición, estructura y contenidos de la ley de Justicia y Paz 975 de 2005 integralmente es inconstitucional, por las siguientes razones:

1.1. La ley en sí misma es violatoria de los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por Colombia, en particular con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de Roma y los Protocolos de Ginebra y su Protocolo Adicional II, el Derecho Internacional y el Derecho Penal Internacional. Así mismo el contenido de la ley está por fuera de los cánones constitucionales en cuanto a principios, valores y preceptos.

La ley de Justicia y Paz violenta los principios de igualdad y no discriminación, la legalidad de los delitos y de las penas, la proporcionalidad de las sanciones penales, la responsabilidad del Estado y la garantía de los derechos de las víctimas. Así mismo la ley como tal no garantiza la prevención y penalización a las violaciones de los derechos humanos desde los principios de individualización, proporcionalidad y razonabilidad.

La ley de Justicia y Paz tampoco garantiza el juzgamiento a los criminales de guerra, que al no hacerlo, queda habilitada la competencia de la Corte Penal Internacional para dirimir e intervenir en el caso colombiano para investigar y juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil desarmada.

1.2. La ley ha debido ser tramitada como estatutaria y no como ordinaria, en razón a que su núcleo principal son los derechos fundamentales de la verdad, la justicia y la reparación. Al no haberse tramitado en concordancia con el artículo 152 superior, la ley en su conjunto es inconstitucional.

1.3. En concordancia con la constitución Política, se pueden conceder amnistías o indultos por delitos políticos y no por delitos comunes. Los crímenes de los grupos paramilitares son delitos comunes. Adicionalmente, las rebajas de penas deben ser tramitadas por mayorías especiales de 2/3 de los votos de las dos cámaras, lo cual no se tramitó.

1.4. El contenido y las ejecutorias de la ley de Justicia y Paz no garantizan que se surtan los tres derechos fundamentales de las víctimas a saber: la verdad de los hechos, a la justicia y a la reparación del daño ocasionado.

1.5. El primer debate de la ley se tramitó desconociendo el artículo 159 de la Constitución Política, sin que se hubiera apelado todo el proyecto de ley y no

meramente los artículos 70 y 71, los cuáles fueron declarados inexecutable por esta razón. Toda la ley ha debido ser declarada inexecutable por la Corte Constitucional.

2. Segunda Conclusión: La Ley 975 de 2005 redefinió el delito de sedición confiriendo estatus político a los grupos paramilitares.

La ley 975 de 2005 desde el comienzo tuvo la clara intencionalidad de erigirse como el mecanismo para conferir estatus político a los grupos paramilitares, lo cual los recomponía como interlocutores válidos con el gobierno y la comunidad internacional. A su vez maquillaba de lucha política las masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos contra la población civil inerme.

En el artículo 71 de la Ley de Justicia y Paz, se redefine el delito de sedición, equiparando el accionar y motivación política de las autodefensas al de los grupos guerrilleros, siendo un exabrupto jurídico-político, en la medida que los grupos paramilitares se identificaron desde el comienzo como aliados del Estado y contra las guerrillas.

Simultáneamente, la opinión pública nacional e internacional tenía claramente identificado que el accionar paramilitar se caracterizó por actuaciones contra la población civil y que los crímenes y delitos cometidos por éstos eran eminentemente comunes y no se podrían clasificar como delitos políticos.

Esta iniciativa gubernamental, además de ser temeraria desde el punto de vista político, fue altamente lesiva y agresiva al orden jurídico constitucional, en razón a que contravenía los cánones internacionales sobre derechos humanos que Colombia ha adherido a su bloque de constitucionalidad.

Aún cuando la Corte Constitucional declaró inexecutable el artículo 71 de la ley, no fue argumentada por su contenido, sino por vicios de procedimiento en su formación, sin que esta inexecutableidad hubiera tenido los esperados resultados de inaplicación de la ley en el aspecto de la alternatividad penal.

Cuando la Corte Constitucional definió que la Sentencia tendría efectos hacia el futuro, reafirmo y reconoció la favorabilidad para los grupos paramilitares al declarar exequibles normas declaradas y demandadas como inconstitucionales.

La Ley 975 de 2005, en su artículo 71, introdujo una novedosa, pero a su vez polémica consideración para la tradición jurídico-penal colombiana, en lo que concierne a la variación de la nominación penal de la conducta de pertenecer o conformar grupos armados al margen de la ley. Se trata de una adición por la cual se entiende como responsable del delito político de sedición, a todo aquel que conforme o pertenezca a un grupo armado al margen de la ley, cuya finalidad sea impedir de manera transitoria y mediante el empleo de las armas el libre funcionamiento del régimen constitucional y legal.

Sin embargo, dicho artículo fue declarado como inconstitucional por la Corte Constitucional en la Sentencia N° C-370 de 2006 por vicios de fondo. En la tradición colombiana se ha entendido el delito político como aquel cometido por quién pertenece a un grupo guerrillero, el hecho de ligarse la actuación paramilitar a acciones que

entorpecen mas no que pretenden sustituir el régimen constitucional o legal vigente es una concepción ajustada a nuevas realidades.

Así, en las primeras providencias sobre esta cuestión, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado N° 24803 de 7 de febrero de 2006, M.P. Alfredo Gómez Quintero, realizó un estudio sobre si el comportamiento de los grupos armados al margen de la ley, se podría catalogar como delito político. En conclusión determinó que teniendo en cuenta el principio de igualdad y que ambos grupos eran al margen de la ley no habría porque darle un significado diferencial. En el marco del conflicto armado considera la Sala que “la nueva tipología que recoge la pertenencia a grupos de guerrilla o autodefensa como propia del delito de sedición en el referido artículo 71, se explica en el orden en que el proceso de paz sitúa en cada uno de los extremos a una y otra fuerza en conflicto”

En consecuencia, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado N° 24222 de 18 de octubre de 2005, M.P. Sigifredo Espinoza Pérez, expresó que la sedición “sólo abarca las situaciones en que los grupos armados al margen de la ley (llámese guerrilla o autodefensas) obran con la finalidad de interferir el orden constitucional y legal, atacando exclusivamente la operatividad de los poderes públicos. (...) [La calidad de delincuentes políticos] no los deja a salvo de que se les pueda procesar por delitos comunes ejecutados con desbordamiento de los límites razonablemente aceptados para el delito político”.

3. Tercera conclusión: El derecho a la verdad que tienen las víctimas no es verdad en la aplicación de la ley de Justicia y Paz.

El derecho a conocer la verdad de las víctimas, no solamente se limita a saber qué paso con su familiar desaparecido y cuáles fueron sus autores materiales e intelectuales, sino y principalmente, a saber la verdad sobre las circunstancias que motivaron las graves violaciones de derechos humanos, a identificar a sus determinadores, financiadores, a los coparticipes de la fuerza pública y a los principales beneficiados.

La sistemática violación de derechos humanos acaecidos y la sevicia de los métodos utilizados han sido una afrenta grave contra la dignidad e integridad espiritual de la sociedad colombiana y de toda la humanidad. Al ser víctima, a la sociedad le asiste el mismo derecho a la verdad sobre la comisión de delitos de lesa humanidad y a identificar a sus autores materiales e intelectuales.

El derecho a la verdad que tienen las víctimas y la sociedad entera, obliga al Estado a garantizar su ejecutoria real y completa.

La verdad no podía garantizarse en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, debido a que ésta se diseñó para garantizar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares. El artículo 25 de la ley blindó al masacrador para que confiese de lo que se acuerde, dejando únicamente, a cambio, el aumento en el quantum de la pena de hasta un veinte por ciento por hechos conocidos con posterioridad a la sentencia.

Con el artículo 25 de la ley y con la definición laxa de la Corte Constitucional, no se obligó a los desmovilizados a confesar toda la verdad sobre los patrocinadores, financiadores y fuerza pública que participaron activa y públicamente en las regiones en los vergonzosos sucesos de violación de derechos sobre la población civil inerme.

La verdad tampoco podía garantizarse, en razón a que antes de promulgarse la ley de Justicia y Paz, la situación de aplicación de justicia en Colombia era de flagrante y descarada impunidad a todos los niveles.

El logro del derecho fundamental a la verdad tampoco fue favorecida en la Sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional, la cual se centró en validar los aspectos centrales de la ley, desconocer los argumentos de los demandantes en los aspectos medulares de la aplicación ejecutoria de la ley y en hacerle el vacío a aspectos de peculiar significación para las víctimas, a través de la declaratoria de inhibición en 9 puntos resolutivos.

Adicionalmente, el derecho a la verdad se fundamenta en su función histórica, social y moral, en razón a que de su logro efectivo se garantizará que los hechos no tengan ocurrencia de repetición, consolidando la posibilidad del repudio social y la recuperación permanente de la memoria colectiva. El logro de estos elementos son básicos para que la resistencia social y cultural no posibilite en el futuro la repitencia de los hechos de torturas, descuartizamientos, violentación sexual, alevos asesinatos y los vejámenes de todo tipo a que fue sometida la población civil. Le asiste al Estado

colombiano la obligación de garantizar lo que en Argentina se ha denominado: NUNCA MÁS.

4. Cuarta conclusión: El derecho a la Justicia a que tienen derecho las víctimas es de injusticia plena para éstas en la aplicación de la ley 975 de 2005

La Ley de Justicia y Paz 975 de 2005, en su integralidad fue diseñada para blindar la impunidad de los paramilitares, lo cual hacía prever sin esfuerzo, que no podría cumplir con el derecho fundamental a la justicia que tienen las víctimas. Esta ley fue estructurada para la favorabilidad penal de los genocidas, no para garantizar los derechos de las víctimas.

La alternatividad penal definida en la ley 975 de 2005, según la gravedad de los delitos y la colaboración para el esclarecimiento de los hechos, de rebajar las penas por un periodo mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, se constituye en una fragante violación del principio de proporcionalidad y la ruptura de la unidad jurídica de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Además, es una concesión excepcional subjetiva y personal, la cual es contraria y violatoria al ordenamiento jurídico, referido al derecho a la igualdad ante la ley que rubrica el artículo 13 de la Constitución Política.

Esto porque el código penal colombiano define con claridad que la fijación de las penas debe cumplir con los principios de ser abstractas, predeterminadas, ajustarse a la igualdad, a la proporcionalidad, cumpliendo con las normas de cuantificación punitiva para cada caso. Todos estos principios son violentados por la Ley de Justicia y Paz.

Existe un sistema de acumulación jurídica de penas para la comisión de varios delitos, que se violentó con la ley de justicia y paz, en razón a que la mayoría, si no todos, los paramilitares desmovilizados cometieron un sinnúmero de asesinatos conexos a muchos otros delitos que no son políticos, sino absolutamente delitos comunes, que desde luego no iban a confesar, o cuando lo hacen, no dicen la verdad. Para fundamentar tal despropósito jurídico, basta con decir que el mayor porcentaje de los delitos cometidos son connotados como genocidio, el cual en el código penal está penalizado con 480 a 600 meses, mientras la ley de Justicia y Paz lo rebaja a 60 hasta 96 meses.

Respecto a que la aplicación de la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005 no ha podido, ni podrá garantizar el derecho a la justicia de las víctimas, tiene su asidero jurídico en la disertación del Honorable Magistrado Jaime Araujo Rentería respecto a que:

Resulta claro que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia como un haz inescindible. La paz, que es un valor importante, no es absoluto, ni único. No hay paz sin justicia. La paz no se puede lograr al precio de una injusticia extrema. La injusticia extrema no es derecho, como dijera el ius filósofo Gustav Radbruch. La ley que consagra una injusticia extrema no es derecho y por no ser derecho, la ley nunca surge a la vida jurídica. (Araujo J. 2007).

La demostración que la Ley de Justicia y Paz 975 de 2005 se diseñó para garantizar la impunidad a los grupos paramilitares, se expresa con claridad en el hecho que hasta agosto de 2012 (a siete años de entrada en vigencia la ley), de los 35.353

desmovilizados, 31.281 (el 80%) fueron exonerados de investigación de los crímenes cometidos, siendo postulados únicamente 4.511, de los cuales sólo 4 postulados han recibido condena, aunque sólo uno (1) de ellos con sentencia debidamente ejecutoriada. (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2011).

En el caso de la Sentencia de Mampujan por parte de la Fiscalía 11 Unidad Nacional de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en audiencia llevada a cabo el 29 de Junio de 2010, contra los postulados Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino” comandante del Bloque Montes de María y Huber Enrique Banques Martínez, alias “Juancho Dique”, comandante del Frente Canal del Dique, los cuales fueron condenados a treinta y nueve (39) años de prisión, concediéndoseles la rebaja a ocho (8) años, ha sido la más clara demostración de impunidad en Colombia y la más palmaria expresión de la negación del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a que tenían derecho las víctimas.

Es de conocimiento público nacional e internacional que en Montes de María se cometieron masacres, genocidios, desplazamientos y múltiples delitos, los cuales constituyen la afrenta más grande a la dignidad de los pueblos. Estos crímenes de lesa humanidad fueron planificados, dirigidos y ejecutados por estos dos criminales, beneficiados por la alternatividad penal, siendo sentenciados únicamente a ocho (8) años de prisión. Es inevitable que en el futuro la Corte Penal Internacional intervenga en este caso en particular y sobre los casos de los jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos.

5. Quinta conclusión: El derecho a la reparación integral y multidimensional a que tienen derecho las víctimas es una burla

El derecho fundamental a la Reparación a que tienen derecho las víctimas, no es como lo concibió la Ley de Justicia y Paz, y de la manera como se ha venido aplicando: una indemnización económica pírrica, un desagravio y una cínica petición de perdón en público de los asesinos a las múltiples víctimas, que miran con desasosiego, que éste es condenado entre cinco (5) y ocho (8) años por la comisión de delitos múltiples, masacres y genocidios. En la mayoría de los casos no confiesan la comisión de delitos y mucho menos el paradero de los desaparecidos.

El derecho a la reparación está estatuido desde 1928 por la Corte Internacional Permanente de Justicia, reiterado posteriormente por la Corte Internacional de Justicia.

El derecho a la reparación obliga a los Estados Partes a asumir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual la concibe como una regla consuetudinaria del derecho internacional, aplicable tanto a los derechos humanos como al derecho internacional humanitario.

La Corte Interamericana insiste en que los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para incumplir la obligación de reparar integralmente a las víctimas, debido a que ésta se regula ampliamente por el Derecho Internacional. La Ley de Justicia y Paz 975 de 2005 se constituye en el mejor prototipo de contravención a esta disposición.

En la aplicación de Ley de Justicia y Paz 975 de 2005 las víctimas no han recibido, ni podrán recibir el derecho a la reparación integral y multidimensional. La restitución, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición no se podrán aplicar porque la misma concepción y filosofía de las disposiciones no lo permiten y porque las condiciones jurídicas, materiales, económicas, políticas y culturales no soportan el cumplimiento cabal en las diferentes regiones de la geografía nacional. Las indemnizaciones económicas se han estado dando de manera irregular, desigual y discontinúa.

A estos factores se suma la reiterada interpretación jurídica unilateral de algunos fiscales, los cuales dan aplicabilidad subjetiva con fuero discrecional a normas claramente definidas y de carácter obligatorio.

6. Sexta conclusión: Graves inconsistencias de coherencia jurídica en la Ley 975 de 2005, la hacen inaplicable e inviable

6.1. La Ley 975 de 2005 como mecanismo de Justicia Transicional, se aplicaba para las desmovilizaciones que se dieran antes del 25 de julio de 2005, fecha en que ésta entró en vigencia, aplicable a delitos cometidos antes de esta fecha. De los 4.801 postulados, el 80% se desmovilizó después de la fecha de vencimiento de la vigencia, presentándose que 3.600 hechos ocurrieron después del 25 de julio de 2005. ¿Cómo resolverán esta incompatibilidad?

6.2. En razón a que las penas se definieron entre 5 y 8 años, en julio de 2011, a los seis (6) años de entrada en vigencia la ley, se planteó por parte de los representantes de los grupos paramilitares desmovilizados, que la mayoría de postulados podrían pedir la libertad, aduciendo que ya habrían cumplido la pena. Si se

tiene en cuenta, que a julio de 2011 casi ninguno de los paramilitares había sido juzgado, ni había cumplido con las condiciones exigidas para acogerse a los beneficios de la ley, era improcedente jurídicamente que fueran exonerados por pena cumplida. ¿Cómo resolverán esta inconsistencia jurídica?.

6.3. Teniendo en cuenta que transcurridos 7 años tan sólo se han promulgado 4 sentencias, la complejidad y lentitud de los procedimientos, el gran número de postulados, se ha venido esgrimiendo la tesis que para surtir todos los casos con sentencia en firme, se tardaría 96 años. ¿Cómo resolverán la congestión? Porque jurídicamente no es posible sino resolver este aspecto.

6.4. Desde el comienzo no se ha tenido claridad sobre los parámetros que tiene el gobierno nacional para seleccionar a los postulados, presentándose situaciones en las cuales algunos fiscales ofrecen la postulación a cambio de confesiones completas; presentándose casos en los cuales reincidentes de delitos se ofrecen a ser postulados. El fuero discrecional del gobierno para definir unilateralmente sobre el tema se encuentra sobresaturado y no habrá mecanismo posible que corrija la descarada favorabilidad para amparar la impunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACUERDO POLITICO. Con el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL). Suscrito en Caldono-Cauca el 27 de Mayo de 1991.

ACUERDO POLITICO. Con el Frente Garnica de la Coordinadora Guerrillera. Suscrito en Cañaveral el 30 de Junio de 1994.

ACUERDO POLITICO. Con el Movimiento Independiente Revolucionario – Comandos Armados (mir-coar). Suscrito en Medellín el 29 de Julio de 1998.

ACUERDO SANTAFÉ DE RALITO. Gobierno Nacional-Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C. 15 de Julio de 2003.

ARANGO, Gonzalo. Obra Negra. Editorial Carlos Lohle. Buenos Aires.1974.

ARANGUREN Molina, M. Mi Confesión. Bogotá. Editorial Oveja Negra. 2001.

BOTERO, Marino, C. & Restrepo Saldarriaga, E. Entre el Perdón y el Paredón. Estándares Internacionales y Procesos de Transición en Colombia. Bogotá. Editorial Corcas. 2005.

CENTRO de Investigación y Educación Popular -CINEP-. Una experiencia piloto de paramilitarismo. [En línea] descargado www.arlac.be. Puerto Boyacá.

CENTRO por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, Washington. [En línea]. Descargado www.cejil.org. 2 Diciembre 2005.

CENTRO de Investigación y Educación Popular -CINEP-. El MAS. [En línea] descargado www.arlac.be.

CEPEDA CASTRO, Iván. Paramilitarismo en Colombia. Pacto de Lealtades e impunidad [En línea]. Descargado de www.rebellion.org. Publicado En 2007.

COCALOMBIA. [En línea] descargado de www.voy.com. Publicado: 02 Julio 2006.

COLECTIVO de abogados José Alvear Restrepo. Consolidación Paramilitar e impunidad en Colombia [En línea] descargado de www.colectivodeabogados.org. Publicado 14 Marzo 2006.

COMISION ANDINA DE JURISTAS. Informe Derechos Humanos. Septiembre 1998. Perú.

COMITÉ OPERATIVO para la dejación de Armas. Decreto 3360 de 2003 reglamentario de la Ley 418 de 1997.

CONFERENCIA, Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 11, párr. 66; Caso 19 Comerciantes, supra nota 190, párr. 188, y Caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párr. 209.

_____ Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de Noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 90; Caso Caballero Delgado y Santana. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 31, párr. 58; y Caso Neira Alegría y Otros, Reparaciones, supra nota 38, párr. 69.

_____ Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 100; Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 200; y Caso Aloeboetoe y Otros, Reparaciones, supra nota 40, párr. 109.

_____ Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, supra nota 5, párr. 69; Caso Cesti Hurtado, Reparaciones, supra nota 5, párr. 62; Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 100; y Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, pár. 200.

_____ Caso Cantoral Benavides, Reparaciones, supra nota 5, párr. 69; Caso Villagrán Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 99; Caso Paniagua Morales y otros, Reparaciones, supra nota 5, párr. 199; y Caso Bámaca Velásquez, supra nota 6, pár. 129.

_____ Padre GIRALDO, Javier. Audición sobre los DDHH en Colombia: Balance y perspectivas de los derechos civiles, económicos y sociales. Parlamento Europeo, Bruselas, 01 de Diciembre 2004.

CONFESIONES de SALINAS, Viáfara Diego, Concejal de Puerto Boyacá, elaboradas por Agentes del DAS. [10 de mayo de 1988].

CONFESION de ZAMORA GUZMÁN, Camilo. Juzgado Cuarto de Orden Público de Villavicencio, 10 y 11 Abr. 1989.

CONGRESO NACIONAL. Ley 48 de 1968. Diciembre 1965.

_____ Ley 241 de 1995.

_____ La ley 418 de 1997.

_____ Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 211 de 2005 Senado, 293 de 2005 Cámara.

_____ Ley 782 de 2002. Artículo 60.

_____Preámbulo de la ley 975 de 2005.

_____Ley 975 de 2005. Artículos 1, 6,7, 8, 10, 11, 17, 18, 69, 21, 23, 26, 29, Parágrafo 1 del art. 19, Inciso 2 del Art. 19, Parágrafo 3 del Art. 26, Parágrafo 2 del Art. 26.

_____Proyecto de Ley Estatutaria No. 85

CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta. Radicación No. 295 del 22 de junio de 1989. Consejero Ponente: Jaime Paredes Tamayo.

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-102 de 1993, M.P Carlos Gaviria Díaz.

_____Sentencia C-454/06.

_____Sentencia C-319/06.

_____Sentencia C-370/06.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Casación Penal. Proceso No. 26945. Julio 11 de 2007. Magistrados Ponentes: Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Caso Furundzija, ICTY Trial Chamber. Special Court For Sierra Leone Decision on Challenge to Jurisdiction: Lomé Accord Amnesty, 13 Marzo 2004.

_____Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros), supra.

_____Caso Bámaca Velásquez, supra nota 6, Resolutivo Octavo.

_____Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia.

DECLARACIÓN DE OSLO, Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, en 29ª Asamblea. París del 21 de Octubre al 12 de noviembre de 1997.

DECRETO 3398 de 1965.

DECRETO 3398 - Art. 25, Art. 33, par.

DECRETO 356 de 1994.

DECRETO 128 de 2003.

DECRETO 1290 de 2008.

DÍAZ, Rubén. Cocalombia [En línea]. Publicado: 02 Jul. 2006. Descargado de Internet <http://www.voy.com>. General Yarborough. En: Informe de visita de Escuela de Guerra Especial de Fort Braga. Carolina del Norte. (Febrero de 1962).

DICCIONARIO de la lengua española. Vigésima segunda edición. Madrid: Espasa. 2004. p. 255.

EL IMPERIO PARAMILITAR de Victor Carranza. [El línea]. Descargado www.calories.com.

EL PARAMILITARISMO: Una criminal política de Estado que devora el país. [En línea]. Descargado www.javiergirald.org. Agosto 2004.

EL PARAMILITARISMO en Colombia, ayer y hoy: [En línea]. Descargado www.javiergirald.org. 19-03-2003.

EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Manual FM-31-15: Operaciones contra las Fuerzas Irregulares. Febrero 30 de 1962.

GARCIA, Daniel y Peña. La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico. En: Revista Análisis Político. No. 53 2005. 59 p.

GARZÓN, Juan Carlos. El Poder Paramilitar. La complejidad Paramilitar: Una aproximación estratégica. Bogotá: Editorial Planeta, 2005.

GAVIRIA Díaz, Carlos. Sentencia T-102 de 1993.

_____ Sentencia C-543 de 1998.

GIRALDO, Javier. Conferencia sobre los DDHH en Colombia: Balance y perspectivas de los derechos civiles, económicos y sociales, celebrada el 01 Diciembre 2004 en el Parlamento Europeo, Bruselas.

INFORME de Visita en Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg. 26 febrero 1962.

INTERROGATORIO MENESES BAEZ, Luís Antonio. Mercenario Condenado. En: Revista Semana. 18 Marzo 2002.

INSTRUCCIONES Generales para Operaciones de Contraguerrillas". Cap. IV, 31 Diciembre 1979.

INFORME, Procurador General – MAS. 20 Febrero 1983.

MANUAL FM-31-15. Operaciones contra las Fuerzas Irregulares, 30 Febrero 1962.

MORENO DE CARO, Carlos. Alternatividad Penal. Proyecto de Ley 207 de 2005.

NACIONES UNIDAS. CARTA. La libertad, la justicia y la paz. Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

OCAMPO, Javier. Historia de Colombia, Salvat, Tomo 12, Bogotá. 1988.

OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L. 1981.

PACTO Político por la Paz y la Democracia. 2 de Noviembre de 1989.

PARDO, Rafael. La historia de las guerras. Bogotá: Ediciones B Colombia, 2004. 611. p.

PRETEL DE LA VEGA, Sabas. Proyecto de Ley N° 208. En: Congreso Nacional de Colombia.

RANGEL, Alfredo. Guerra Insurgencia. Bogotá: Editorial Intermedio, 2001. 353. p.

_____Las FARC-EP: una mirada actual. En Malcolm Deas y María Victoria Llorente. Reconocer la guerra para construir la paz. Bogotá: CEREC, Ediciones Uniandes, 1999. p. 23.

_____Guerreros y Políticos: Dialogo y Conflicto en Colombia. Bogotá: Intermedio Editores, 2003. 281 p.

_____El poder paramilitar. Bogotá: Editorial planeta. 2006. p. 29.

RESTREPO RAMIREZ. Luís Carlos. Comunicado, Alto Comisionado.

RESTREPO Alvear, José. Consolidación paramilitar e impunidad en Colombia (En línea). Publicado: 14 Mar. 2006. Descargado de Internet <http://www.colectivodeabogados.org>.

SALAZAR, Gustavo. Paramilitarismo: Una aproximación a sus orígenes y evolución. Mimeo, 1999.

SAMUDIO, Rafael. Pronunciamiento Ministro de Defensa. En: Revista de las Fuerzas Armadas. Debate Congreso. Septiembre 1987.

SÁNCHEZ, Gonzalo y MEERTENS, Donny. Bandoleros, Gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia. Bogotá: El Áncora editores, 1983.

UPRIMI, Rodrigo y SAFFON, María Paula. Entre el Perdón y El Paredón. Justicia Transicional y justicia Restaurativa. Bogotá: Editorial CORCAS, 2005.

UPRIMI, Rodrigo y SAFFON María Paula. Entre el Perdón y El Paredón. Justicia Transicional y Justicia Restaurativa. Bogotá: Editorial CORCAS, 2005.